C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. LANDELINO LAVILLA ALSINA

Sesión Plenaria núm. 119

celebrada el miércoles, 15 de octubre de 1980

ORDEN DEL DIA (continuación)

Debate y votación de totalidad de Reales Decretos-leyes:

- 7/1980, de 23 de agosto, de medidas urgentes para la iniciación del curso escolar 1980-81, ampliación de plantillas de Cuerpos docentes y concesión de suplementos de crédito para ayudas de enseñanza y contratación de personal docente y auxiliar («Boletín Oficial de las Cortes Generales», serie H, número 38-I, de 7 de octubre de 1980).
- 8/1980, de 28 de septiembre, sobre fraccionamiento en el pago de atrasos de pensiones derivadas de la guerra civil («Boletín Oficial del Estado» número 236, de 1 de octubre de 1980).
- 9/1980, de 26 de septiembre, sobre financiación de los Ayuntamientos y tasa del juego («Boletín Oficial del Estado» número 236, de 1 de octubre de 1980).

(Continúa el orden del día en el «Diario de Sesiones» número 120, del 16 de octubre de 1980.)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

Se continúa con el orden del día.

Debate y votación de totalidad de Reales Decretos-leyes:

Página

— 7/1980, de 23 de agosto, de medidas urgentes para la iniciación del curso escolar 1980-81, ampliación de plantillas de Cuerpos docentes y concesión de suplementos de crédito para ayudas de enseñanza y contratación de personal docente y auxiliar 7561

Turno en contra, del señor Fuentes Lázaro (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso). El señor Arnau Figuerola (Grupo Parlamentario Centrista) consume un turno a favor, del Real Decreto-ley. Interviene para fijar la posición de su Grupo Parlamentario la señora Vintó Castells (Grupo Parlamentario Comunista). Efectuada la votación, fue acordada la convalidación del Real Decreto-ley.

El señor Presidente anuncia que el Grupo Parlamentario Comunista ha solicitado la tramitación de este Decreto-ley como proyecto de ley. Se suma a esta petición el señor Herrero Rodríguez de Miñón en nombre del Grupo Parlamentario Centrista. Efectuada la votación correspondiente, fue acordada la tramitación como proyecto de ley de este Decreto-ley.

Página

— 8/1980, de 26 de septiembre, sobre fraccionamiento en el pago de atrasos de pensiones derivadas de la guerra civil 7572

El señor Ministro de Hacienda (García Añoveros) hace uso de la palabra para explicar las razones de haberse dictado este Real Decreto-ley.

Para consumir un turno en contra, interviene el señor Bono Martínez, don Emérito

(Grupo Parlamentario Comunista). Para fijar la posición de sus Grupos Parlamentarios, hacen uso de la palabra los señores Bujanda Sarasola (Grupo Parlamentario Vasco-PNV), Trías Fargas (Grupo Parlamentario de la Minoría Catalana) y Ramos Molins (Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña).

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

Prosigue el debate del Real Decreto-ley 8/1980. Intervienen para fijar la posición de sus Grupos Parlamentarios los señores Ramos Fernández-Torrecilla (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso) y Bravo de Laguna Bermúdez (Grupo Parlamentario Centrista). A continuación, hace uso de la palabra el señor Ministro de Hacienda (García Añoveros). Efectuada la votación, fue acordada la convalidación de este Real Decreto-ley. Seguidamente el señor Presidente da cuenta de que se ha solicitado que se someta a decisión de la Cámara la tramitación de este Decreto-ley como proyecto de ley. Efectuada la votación correspondiente, fue así acordado.

Página

— 9/1980, de 26 de septiembre, sobre financiación de los Ayuntamientos y tasa del juego 7593

El señor Tamames Gómez consume un turno en contra de este Decreto-ley en nombre del Grupo Parlamentario Comunista. Le contesta el señor Rodríguez-Miranda Gómez, por el Grupo Parlamentario Centrista. Intervienen a continuación, para fijar la posición de sus respectivos Grupos Parlamentarios sobre este Decreto-ley, los señores Lluch Martín (Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña), a quien contesta el señor Ministro de Hacienda (García Añoveros), y Fajardo Spínola (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), con contestación también del señor Ministro de Hacienda. Efectuada la correspondiente votación, fue acordada la convalidación de este Real Decreto-ley.

A continuación, el señor Presidente da cuenta de que, a petición de varios Grupos Parlamentarios, se somete a decisión de la

Cámara la tramitación como proyecto de ley de este Decreto-ley. Efectuada la oportuna votación, fue así acordado.

El señor Presidente anuncia que el Pleno continuará mañana, a las cuatro y media de la tarde.

Se levanta la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro y cincuenta minutos de la tarde.

DEBATE Y VOTACION DE TOTALIDAD DE REALES DECRETOS-LEYES:

— 7/1980, DE 23 DE AGOSTO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA INICIACION DEL CURSO ESCOLAR 1980-81, AMPLIACION DE PLANTILLAS DE CUERPOS DOCENTES Y CONCESION DE SUPLEMENTOS DE CREDITO PARA AYUDAS DE ENSEÑANZA Y CONTRATACION DE PERSONAL DOCENTE Y AUXILIAR.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Sometemos, en primer lugar, a debate el Real Decreto-ley 7/1980, de 23 de agosto, de medidas urgentes para la iniciación del curso escolar 1980-81, ampliación de plantillas de Cuerpos docentes y concesión de suplementos de crédito para ayudas de enseñanza y contratación de personal docente y auxiliar, texto que aparece publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 24 de septiembre de 1980.

¿Grupos que desean intervenir en el debate correspondiente a este Real Decreto-ley? (Pausa.) Intervendrán en el debate los Grupos Parlamentarios Comunista, Socialista del Congreso y Centrista.

¿Alguno de estos Grupos desea consumir turno a favor o en contra, o simplemente turno de fijación de posición del Grupo? (Pausa.) El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso consumirá un turno en contra. Turno de Grupos: Grupo Parlamentario Comunista. Grupo Parlamentario Centrista turno a favor.

Por el Grupo Parlamentario Socialista del

Congreso, y para consumir turno en contra, tiene la palabra el señor Fuentes.

El señor FUENTES LAZARO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados; me van a perdonar que inicie mi intervención con una reflexión de carácter personal, reflexión que nació en el momento de leer repetidamente el Decreto-ley que nos ocupa, porque leyendo y releendo este Decreto-ley experimentaba sensaciones contradictorias difíciles de explicar: por un lado, se me antojaba que este decreto era una nueva forma insólita de legislar y éste era un aspecto novedoso y atractivo. Pensaba que el surrealismo más distorsionado se había sentado en el Ministerio de Educación para crear obras como la que hoy se nos presenta.

Reconocerán ustedes que este dato es sorprendente, sobre todo cuando estamos acostumbrados a la monotonía, al aburrimiento y a la falta de imaginación de los sucesivos Gobiernos que se van sentando en el banco azul.

Por otro lado, sin embargo, me parecía tal desfachatez, tal manera esmerpéntica de entender la labor de un Ministro, que no daba crédito a lo que leía. Me parece este Decreto-ley, y perdonen ustedes la expresión, tal tomadura de pelo a la sociedad española y a este Parlamento, que uno tiene la sensación de que el Ministro y el Gobierno nos están incitando al caos como forma catártica de sublimar la inoperancia, la incapacidad, la inercia de varios años de gobierno con poco Gobierno. Porque, Señorías, este Decreto-ley es un «collage» insólito, es una caja de sorpresas alucinante, donde hay todos los temas imaginables. Hay una ampliación de plantillas de profesores de EGB, BUP y Formación Profesional, y puesto que es la primera vez que aparece, quiero hacer referencia, para que quede muy claro y nadie tergiversar lo que vamos a decir aquí, a que nosotros consideramos esta ampliación de plantillas totalmente positiva.

Hay también una convocatoria de ayuda a la enseñanza por un importe de 530 millones de pesetas. Existe asimismo en este Decreto-ley la creación de un nuevo concepto en el presupuesto del Organismo autónomo Patronato de Promoción de la Formación Profe-

sional, denominado «Subvenciones para gastos de sostenimiento de la Formación Profesional de segundo grado en centros no estatales», y subrayo «en centros no estatales». Por último, por si nos quedaba alguna capacidad de sorpresa, el Gobierno se autoriza a sí mismo para regular el régimen de oposiciones y concursos del profesorado, al margen, por supuesto, de los profesores y dejando entrever unas intenciones ocultas.

Es éste, pues, y lo defino de una manera suave, un mosaico de barbaridades producido a finales del mes de agosto —no olvidemos que es del 29 de agosto—, cuando creo que el viento solano de la crisis ministerial enfiebrece al Ministro de Educación. Pero, además, la primera parte de este Decreto-ley, la ampliación de plantillas, tiene una historia paralela que es preciso que conozcan. Es la historia de la imprevisión y de la incoherencia de un Ministro.

El 18 de enero de 1980 se presentaba un proyecto de ley sobre ampliación de plantillas de Cuerpos docentes. El 7 de mayo fue aprobado en Ponencia. El dictamen de la Comisión se demoró hasta el 25 de junio, porque Unión de Centro Democrático pretextó que el propio Gobierno iba a enmendar esta ley. Por fin, el 27 de junio se veía y se aprobaba en esta Cámara, a pesar de los avisos del Grupo Socialista y de otros Grupos. Actualmente, este proyecto de ley se encuentra en el Senado en su última fase de tramitación.

Y así las cosas, en el Parlamento se nos presenta este Decreto-ley para su convalidación hoy. Pero como pienso, señor Presidente, señoras y señores Diputados, que en este maremágnum de idas y venidas, que en este «totum revolotum» de variopintas propuestas es fácil perderse, voy a intentar sistematizar mi argumentación en los aspectos fundamentales para privarles de las delicias del marasmo de este Decreto-ley.

El artículo 1.º del presente Decreto-ley excede con mucho los límites que el artículo 86, 1, de la Constitución prevé para este tipo de normas. Recordarán que desde 1977 era habitual que las ampliaciones de plantillas se efectuasen por Decreto-ley. Tras la aprobación de la Constitución, el Gobierno pareció aceptar, entre otras cosas, que la ampliación

de plantillas correspondía al Parlamento, al amparo del artículo 86, número 3, de la Constitución y que, en consecuencia, cualquier Decreto-ley sobre este asunto era una injerencia en las tareas legislativas del Parlamento.

Por consiguiente, también cabía pensar que no se recurría a la abusiva técnica del Decreto-ley, sobre todo cuando se aprobó el 27 de junio un proyecto de ley sobre ampliación de plantillas del profesorado y cuando están finalizados ya los trámites parlamentarios sobre este asunto. Porque, dicho de otra manera, si este Decreto-ley se convalida hoy, estamos haciendo escarnio del Parlamento, estamos diciendo: ustedes han trabajado en un proyecto de ley de ampliación de plantillas —por eso es por lo que contaba antes la historia—, pero su trabajo no ha servido para nada. Estamos diciendo: miren ustedes, nosotros presentamos un proyecto de ley insuficiente, en el que no se hacía ninguna previsión por errores del Ministerio. Los Grupos de oposición nos lo dijeron, pero eso no tiene importancia, y quiero recordar aquí las palabras de mi compañero de Grupo, don Francisco Ramos, cuando el 27 de junio decía lo siguiente: «Una ampliación de plantillas de los Cuerpos docentes que no cubre las necesidades que el Ministerio de Educación va a tener el 1 de septiembre, cuando comience el nuevo curso, es una imprevisión y, desde luego, esa imprevisión es verdaderamente grave y lamentable».

Si este Decreto-ley se convalidara, estaríamos dando carta de naturaleza al despiste, la imprevisión y la improvisación de un Ministro que no sabía por dónde se andaba. Seguramente este Decreto-ley se va a pretender justificar como de una extraordinaria y urgente necesidad. Y por semejante razón se va a querer justificar el artículo 3.º de este Decreto-ley, disposición que está violentando, desde todos los ángulos, todas las reservas de ley de la Constitución y otras disposiciones legales. El mencionado artículo 3.º hace referencia a dos suplementos de crédito, el segundo de los cuales concede nada más y nada menos que 530 millones de pesetas al Fondo Nacional para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades, mientras que el artículo 64 de la Ley General Presupuestaria establece que para concesión

de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, el Gobierno presentará los pertinentes proyectos de ley a las Cortes.

Pero aún hay más: se están transfiriendo créditos de una sección a otra distinta, y si esto no le está permitido al Parlamento, no parece lógico que el Gobierno lo pueda hacer, pues sería una forma, yo diría, poco delicada de burlar los créditos globales aprobados por las Cortes Generales.

Y en este descenso a los infiernos que supone leerse el Decreto-ley, paso el artículo 4.º del mismo, al que después me referiré, para llegar al artículo 5.º, donde el Gobierno se autoriza de forma insólita a sí mismo para regular el régimen de oposiciones y concursos, regulación y autorización al Gobierno que, como todo lo que se ha propuesto en materia de educación últimamente, roza lo inconstitucional, pues por un lado la Constitución prevé que la ley regulará el acceso a la función pública, en cuanto que es un derecho de los ciudadanos, lo cual excluye el Decreto-ley, y, por otro, en cuanto a la autorización, no sabemos si se trata de una deslegalización, con los problemas que esta palabra y que este recurso conllevan, ya que debe ser materia de ley formal o, si se trata de revisión normativa, éste es un aspecto que también exige una ley formal.

Pero no es esto todo, señor Presidente. En el artículo 1.º del Decreto-ley se incrementan las plantillas respecto al propio incremento que se introducía en el proyecto de ley que se está tramitando, y se financian con cargo al concepto, por un lado, 18.03.128, y con los remanentes del concepto 18.03.112 del presupuesto del Ministerio de Educación.

Si ya el 27 de junio se ponía de relieve que e' incremento de plantilla —y vuelvo a repetir que los socialistas no estamos en contra del incremento de plantillas—, si ya se ponía de relieve, repito, que el incremento de plantilla se iba a financiar con parte del dinero destinado a inversiones, la amenaza ahora es mucho mayor. En aquel entonces se calculaban 4.000 millones con cargo al crédito de inversiones, y ahora este Decreto-ley viene a confirmar la sospecha que nosotros consideramos, y es que el nuevo incremento de plantilla que aquí se nos propone se financiará a costa de las inversiones. Esto, se-

fioras y señores Diputados, nos parece totalmente inaceptable, porque una vez más se manifiesta el intento claro de estrangular a la enseñanza estatal en favor de la enseñanza privada. Una vez más se pone de relieve cómo, a partir del Estatuto de Centros, caminamos descaradamente hacia la privatización de la enseñanza.

Y no pretendo, no es mi intención ahora, ni mucho menos, hacer demagogia ni desde luego resucitar temas de debate que ya están pasados, porque incluso el mismo Decreto-ley —y son pruebas más que suficientes— concede 530 millones de ayuda a la enseñanza y, aunque se enmascaran sus destinatarios, es obligado hacer referencia a la Orden de 22 de julio de 1980, en la que se convocan ayudas a la enseñanza y que en su artículo 3.º dice textualmente: «La ayuda —a la enseñanza, evidentemente— sólo se podrá solicitar cuando los alumnos asistan o pretendan asistir a centros no gratuitos». Y el artículo termina con una coletilla maravillosa, propia del Ministro que hizo el decreto, diciendo lo siguiente: «A tales efectos —de esta Orden Ministerial—, los Institutos de Bachillerato se entienden como gratuitos».

Por si fuera insuficiente, el 26 de julio se abría una nueva convocatoria para los centros que no tenían ninguna subvención o para aquellos que, subvencionados en una determinada cantidad, quisieran llegar al 100 por cien. Tal actuación —y lo digo sólo como dato anecdótico— posibilitaba el grito entusiasmado del diario «Ya», que el día 25 de julio titulaba un artículo dedicado a la educación de la siguiente forma: «Otros 3.000 millones para todos los niveles de enseñanza».

Pero, independientemente de estas referencias, el artículo 4.º del Decreto-ley que estamos considerando apunta en la misma dirección. Por un lado, los créditos del Estado de gastos del presupuesto del Patronato de Formación Profesional se amplían hasta el límite de la recaudación obtenida y, sorprendentemente, no se cita cantidad alguna. Esto es un paréntesis, señor Ministro, pero no estaría mal que usted intentara explicar la cantidad obtenida de la recaudación de la Seguridad Social con destino a la Formación Profesional, porque pensamos que el mes de

octubre es un buen mes para tener esta información.

Pero la sorpresa es aún mayor cuando en el mismo artículo se dice lo siguiente: «Se autoriza la creación en el presupuesto del organismo autónomo Patronato de Promoción de la Formación Profesional de un concepto con la siguiente denominación: Subvenciones para gastos de sostenimiento de la formación profesional de segundo grado en centros no estatales». Y nos tememos, señor Ministro, que como no se indica la cantidad asignada a la formación profesional no estatal, y no especifica la recaudación obtenida, que de la cuota de la Seguridad Social se van a traspasar fondos a centros no estatales de formación profesional. Y, mientras tanto, hay que constatar que los centros estatales de formación profesional sobreviven en la más absoluta indigencia, están totalmente masificados, no tienen recursos técnicos, están carentes de las medidas necesarias y los profesores viven en una situación de semicaos, de dependencia de sueldos ridículos que les obligan a multiplicidad de trabajos. Esto también nos parece, señor Ministro, totalmente inaceptable.

En consecuencia, este Decreto-ley, junto con los datos citados, hay que considerarlo en su auténtica dimensión. Es el último, o fue el último envite del anterior Ministro para cumplir fielmente los compromisos contraídos con los grupos que le colocaron en el Ministerio. Y no sirven ambages.

Pero es que además hay un hecho que nos resulta intolerable. Se está implantando la financiación de la enseñanza privada cuando el proyecto de ley de financiación está pendiente de discusión en el Parlamento. Y si el uso abusivo de los Decretos-leyes es una forma de burlar al Parlamento, en este caso la política de hechos consumados convierten al Parlamento —y perdonen la expresión— en una auténtica farsa, desde el momento en que se financia la enseñanza privada de hecho, sin que la financiación esté aprobada por ley.

No quisiera terminar, señor Presidente, sin referirme, desde otra perspectiva totalmente diferente, al artículo 5.º de este Decreto-ley. Es éste, como todo el decreto, un artículo conformado por la yuxtaposición, yo diría que sibilina y cabalística, de palabras, donde

se trata de regular el sistema de oposiciones y concursos —y los datos importantes vienen ahora— al margen de los profesores, cosa que antes se hacía, y sobre todo para poderlo utilizar como un arma para pactar con aquellas minorías cuando convenga y cuando se estime oportuno. Se atribuye a la educación la categoría de moneda dejándola reducida a unas dimensiones totalmente insostenibles.

Ya sé, porque ya se ha dicho, que se va a dar una interpretación distinta. Sé que me van a decir que ese artículo no pretende en absoluto nada de lo que yo he dicho aquí, ni nada de lo que se pueda sospechar, ni nada de lo que se pueda entrever. Pero me reconocerán que hubiera sido preferible hacer un artículo no para la interpretación, sino que el artículo hubiera dicho lo que quería decir y nada más, porque todo lo demás es dar pábulo a cualquier interpretación, y esas interpretaciones hay que considerarlas o por lo menos hay que preverlas como posiblemente abusivas.

En definitiva, señoras y señores Diputados, este Decreto-ley hay que situarlo como un saldo por quiebra del Ministro anterior. Es, asimismo, un ejemplo genuino de lo que puede ocurrir cuando un Ministerio se pone no al servicio de una nación, sino al servicio de grupos de presión. Es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la voluntad de un Ministro, me atrevería a decir de un Gobierno, se hipoteca sin condiciones a intereses privados.

Yo rogaría que no se utilice, para justificar este Decreto-ley, ni la necesidad ni la urgencia, porque ya los socialistas lo habíamos advertido; porque nunca, además, en un sistema democrático ambos conceptos pueden ser pretexto para utilizar de forma abusiva un procedimiento antidemocrático; porque nunca puede la urgencia y la necesidad burlar al Parlamento y, al socaire de esta burla o de la confianza en una mayoría, imponer una ley de financiación o rayar en la inconstitucionalidad. La imprevisión o la incapacidad no deben ocultarse tras un Decreto-ley, y esto favorecería al funcionamiento de la democracia y al funcionamiento del Parlamento.

Y voy a terminar ya, señor Ministro, atre-

viéndome a pedirle no sé si favores o dos ruegos. Uno, que se haga usted a sí mismo el favor de no aceptar esta herencia, porque de lo contrario sus declaraciones en la Comisión el otro día (unas declaraciones bien-intencionadas, unas declaraciones que usted conoce fueron bien acogidas por este Grupo) van a resultar papel mojado y, por otra parte, porque es una mala forma de comenzar su actuación. A nosotros nos gustaría pensar, por lo menos pensar, que las cosas, a partir de su nombramiento, van a cambiar para la educación española.

Y un segundo favor. Hágame usted este favor al Grupo —a su Grupo— que le está apoyando; evítele la vergüenza, evítele el sonrojo de tener que votar este modelo de actuación, que yo creo que es totalmente oscurantista y antidemocrático.

Y lo último, luche —y me atrevo yo a decirse—, luche noblemente por sus ideas con las ventajas que la Constitución nos da a todos, con las ventajas del Reglamento de estas Cortes y con la legislación en su mano, pero con transparencia y sin trampas; luche por la privatización de la enseñanza, si así lo cree necesario; luche por una ley de financiación, pero respetando la capacidad legislativa y de control de este Parlamento. No utilice argucias; luchen libremente y tengan la seguridad de que, si así lo hacen, los socialistas no estaremos de acuerdo con sus ideas, pero desde luego respetaremos sus planteamientos siempre que hayan sido hechos con transparencia, con claridad y aplicando las reglas de la democracia, porque en ello estamos todos empeñados.

El señor PRESIDENTE: Para consumir un turno a favor del Real Decreto-ley, por el Grupo Parlamentario Centrista, tiene la palabra el señor Arnau.

El señor ARNAU FIGUEROLA: Señor Presidente, Señorías, después de la intervención del representante del Grupo Parlamentario Socialista quisiera, desde un punto de vista técnico, pasar revista al contenido del famoso Decreto 71/1980, en el que se persigue evidentemente, entre otras cosas, como se ha citado aquí, en primer lugar, un incremento de plantillas; en segundo lugar, unos suple-

mentos de crédito; en tercer lugar, unas modificaciones para la distribución presupuestaria, concretamente del Patronato de Promoción de la Formación Profesional, y, asimismo, que no otra cosa, una coordinación con los Gobiernos autonómicos cuando el profesorado afecta a estos entes o a estas regiones.

En cuanto al artículo 1.º, que hace referencia al incremento de plantillas, como es lógico se ha motivado por un crecimiento de los centros y por un incremento en la demanda de puestos escolares. En este sentido, las cifras someramente se pueden establecer en que, independientemente del proyecto citado —ampliación del proyecto actualmente en curso, como se ha dicho aquí, en trámite en estos momentos en el Senado—, este decreto significa una ampliación respecto al anterior, en cuanto al profesorado de EGB, que alcanza casi los 3.000 profesores (2.927). Esto significa un 2 por ciento del total de las plantillas presupuestadas. Entre la ampliación del proyecto de ley y la ampliación del presente Decreto-ley, el total de aumento se cifra en un 5 por ciento. En cuanto a Catedráticos numerarios de Bachillerato, este incremento del Decreto-ley significa del orden de un 5 por ciento, totalizando el 14 por ciento la ampliación acumulada entre el proyecto de ley y el Decreto-ley. Para los Profesores agregados de Bachillerato, este incremento supone un 5 por ciento, totalizando un 18 por ciento en su conjunto. Por último, en cuanto a Profesores numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de Formación Profesional, el incremento es más significativo, si cabe, porque el crecimiento en este sector ha sido más importante y alcanza con el Decreto-ley el 17 por ciento para los Profesores y el 16 por ciento para los Maestros y el total se acerca en ambos casos al 45 por ciento.

Lógicamente, estos incrementos tienen unas justificaciones, como son, en primer lugar, en cuanto hace referencia a los Profesores de EGB, el número de 2.927 Profesores, que supone un total de alrededor de 719 millones de pesetas. Se basa en que se han puesto en marcha 614 unidades de Preescolar, con un total aproximado de 30.000 nuevos puestos escolares y 3.300 unidades de EGB, que afectan a 135.600 puestos escola-

res, aparte de unas cifras prácticamente insignificantes del exterior.

En cuanto a Bachillerato, Profesores numerarios, Catedráticos y agregados, ello ha significado que los 1.670 Profesores a que afecta el Decreto-ley significan un monto de 289 millones de pesetas, para atender la puesta en marcha de 40 centros, en este caso Institutos de Bachillerato, afectando estos centros a un total de 32.360 alumnos.

Por último, esta ampliación, referida a los centros de Formación Profesional, que ha sido, sin lugar a dudas, lo más destacable en cuanto a crecimiento, afecta a 77 centros, con cerca de 37.900 puestos escolares. El monto económico se acerca a los 350 millones de pesetas.

Bien, en cuanto a este primer punto de incremento de plantillas, me extraña que en este momento se discuta su necesidad, cuando me consta que en otras ocasiones todos los Grupos Parlamentarios han estado de acuerdo en que si realmente se efectuaba una demanda, o incluso las previsiones eran modificables y, por tanto, incrementadas, tenía que corregirse de inmediato, actuando de forma que se pudiera contar con los cupos de profesorado necesario. Esto no es ninguna novedad, porque en esta misma Cámara se aprobó, de manera unitaria, el 26 de enero, un decreto de ampliación de plantillas, en el que todos los Grupos Parlamentarios estuvieron de acuerdo, frente a la demanda existente en aquella ocasión.

En cuanto a otras referencias de suplementos de crédito, y yendo por partes, el primero de ellos afecta al artículo 3.º del decreto, en su punto primero, en el que, en cuanto a nota aclaratoria, este incremento hace especial mención a un caso singular que nos está ocupando desde tiempo y que nos está preocupando a todos, cual es el problema de las sustituciones por ausencia o por enfermedad de profesorado, sobre todo en el importante colectivo de la EGB.

Una valoración de estos porcentajes de profesores que han pedido sustitución oscila entre el año 1973 y 1974 en un 2,3 por ciento, aumenta a una cota máxima de 2,7 por ciento en el 1975-1976, y decrece hasta un 1,84 por ciento en el 1979-1980. Pero, lógicamente, se es consciente de que en este

contenido, además, existe un tipo de escuelas especiales, cuales son las escuelas unitarias, en las que el simple fallo por ausencia o enfermedad del titular puede conllevar a la extraña situación del paro automático del centro. En este sentido, se ha supuesto que el incremento, en lugar de estas cifras que he mencionado, se sitúa en un 3 por ciento para cubrir la demanda actual.

La otra petición, que hace referencia a personal no docente y auxiliar —auxiliares subalternos y personal de limpieza—, lógicamente viene ligada y relacionada con la puesta en marcha de un número de centros, en este caso 40 nuevos Institutos y unos 11 centros artísticos, y, por tanto, se ha dotado de dos personas auxiliares a cada uno de ellos, dos subalternos y tres dotaciones de personal de la limpieza, que presupone el monto económico que ha citado antes el parlamentario socialista.

Acerca del artículo 3.º, de ayudas a enseñanzas del Patronato PIO, normalmente dicho, como Sus Señorías saben, en el anterior curso se daban exclusivamente a nivel de Preescolar (estamos hablando de sectores evidentemente no gratuitos); Preescolar, Bachillerato y COU.

En el año anterior, 79-80, se daban ayudas de tipo completo, no de tipo medio, de un monto de 15.000 pesetas, y ayudas de tipo medio y de tipo completo, de 15.000 y 6.000 pesetas, respectivamente, en Bachillerato y COU. En esta propuesta se contempla la posibilidad de pasar a ayudas completas del orden de 35.000 en el primer caso, y de tipo medio de 20.000, 54.000 y 30.000, respectivamente, en el caso de Bachillerato y COU.

El número de ayudas comparativamente entre el curso anterior y el presente se sitúa en Preescolar en 10.000 de tipo completo, y 42.000 de tipo medio, frente a las 24.000 del curso anterior. Y en el caso de Bachillerato y COU, en unas 10.000 de ayuda de tipo completo, y 42.000 de tipo medio, frente a las 22.000 del curso anterior. Lógicamente, para atender eso son necesarios unos créditos, como aquí se ha apuntado, que en función del número de ayudas que se van a asignar y en función de este costo de cada una de las ayudas suponen del orden de los 2.000 millones de pesetas. Sin embargo, estos 2.000

millones de pesetas se fraccionan para lo que es año 1980 y lo que es Presupuesto 1980, de los que les corresponden 530.000, teniendo en cuenta el cuatrimestre que afecta a este curso, y el resto, Señorías, está en los Presupuestos Generales del Estado, que pronto tendremos que discutir en esta Cámara y que serán éstos o no serán, en función de las discusiones que vengan en aquel momento.

Respecto al otro tema, en principio aparentemente delicado, cual es el de las subvenciones a centros de Formación Profesional de segundo grado, sobre todo en cuanto se refiere a los centros no estatales, en primer lugar pensemos que dentro de los centros de Formación Profesional no estatales los hay de privados, evidentemente, pero los hay también dependientes de corporaciones o de instituciones y en algunos casos de municipios.

Por otra parte, si se normaliza la recepción, la aportación de las cuotas al Patronato de Promoción de la Formación Profesional, los montos de que dispondrá este Patronato para su distribución cambian radicalmente de lo que ha sido hasta ahora su disponibilidad. En ese sentido, en cuanto al segundo grado de Formación Profesional se refiere, no olvidemos que se trata de alcanzar un objetivo fundamental en nuestro sistema educativo, especialmente en enseñanzas profesionales, cual es el de impulsar como verdadera Formación Profesional —desengañémonos— la Formación Profesional de segundo grado. Debe ser el eje central de las enseñanzas en Formación Profesional. La ayuda afecta exclusivamente al alumnado y se distingue, aunque quizá las diferencias pudieran ser más acusadas, porque los costos pueden ser distintos, entre alumnos de especialidades llamadas caras y alumnos de especialidades llamadas más baratas, en cuanto a coste de funcionamiento. Me refiero a las de carácter industrial, que se las asigna una ayuda de alrededor de 46.000 pesetas, exactamente 45.675, y a los de carácter administrativo, comercial y de servicios, en los que las ayudas se refieren a 42.187 pesetas. Con ello, la subvención alcanzaría del orden de 1.861 millones de pesetas.

Pero también, con el mismo criterio que antes he expuesto, en cuanto hace referencia

al presente curso, más que curso, año económico, la ayuda significa 465 millones. Lo demás está en Presupuestos del Estado, y cuando se discutan estos Presupuestos, veremos qué es lo que ocurre con esta distribución.

Por último, quiero dar algunos datos acerca de en qué situación se encontraba, especialmente el sector de Formación Profesional, concretamente el Patronato, qué significará para él esta recepción de la cuota de Formación Profesional y cómo se ha pensado distribuir.

Según los Presupuestos Generales del Estado, se acerca a los 8.000 millones de pesetas el presupuesto del 80 para este Patronato. Gracias a ese decreto, al percibirse la cuota de Formación Profesional, el incremento supone alrededor de 9.000 millones, lo cual lo sitúa en un total de 17.000 millones para el presupuesto del 80. Incluso, les anticipo que en los presupuestos del 81, ya en los propios Presupuestos Generales del Estado, la cifra alcanza el valor de 21.000 millones de pesetas.

Esta ampliación de 8.000 a 17.000, entre otras cosas, significa, ha significado o está significando, algunas acciones, entre las que cabe destacar: un concurso de suministro de material, por fin, porque hasta ahora no había sido factible por falta de disponibilidad económica poderlo llevar a cabo, del orden de 500 millones de pesetas para equipamiento de material de centros estatales de Formación Profesional de segundo grado; según tengo entendido, en un próximo Consejo de Ministros, inminente Consejo de Ministros, quedará aprobada esta ayuda; ayudas de tipo RAM, reparación, ampliación y mejora en centros, que alcanzan los 3.000 millones de pesetas, y asimismo ayudas por inversiones, construcción de nuevos centros, del orden de 4.000 millones de pesetas. Además, se incluye aquí, lógicamente, la subvención a los centros de segundo grado de Formación Profesional no estatales, que será del orden, según cifras que he apuntado, de los 400 millones de pesetas. Porcentualmente, esto significa un 4,5 por ciento del presupuesto del Patronato de Promoción de la Formación Profesional.

Termino, Señorías, recordando que la propia Ley General de Educación, cuando habla de la cuota de Formación Profesional, en

su Disposición adicional cuarta, número 1, asegura que esta cuota será dedicada a la Formación Profesional de primer y segundo grado; no distingue, en absoluto, en cuanto si es únicamente de primer grado. Lógicamente, hasta ahora no se había dedicado la cuota a la Formación Profesional de segundo grado, pero ha sido motivado, exclusivamente, porque la cuantía recaudada no permitía atender más que a la Formación Profesional de primer grado, y aun a duras penas.

Además, atendida la gratuidad del primer grado en la totalidad de los centros no estatales, procede, por imperativos de la propia ley, ampliar estas subvenciones, yo diría iniciar estas subvenciones, ordenada y escalonadamente, en función de los criterios antes expuestos.

Termino aclarando que lo único que hace este precepto del Decreto-ley es modificar el presupuesto de gastos del organismo autónomo, pero que en absoluto modifica la legislación vigente sobre utilización de la cuota de Formación Profesional. Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición de su Grupo, en relación con este Real Decreto-ley, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Comunista, la señora Vintro.

La señora VINTRO CASTELLS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, si el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista manifestaba su perplejidad respecto al contenido de este Decreto-ley, que hoy se nos presenta a convalidar, la intervención del Diputado del Grupo Parlamentario Centrista, que teóricamente tenía que venir a justificar algo que es obvio, imprescindible y prescrito por la Constitución, que son las razones de urgente necesidad, a mí realmente me ha dejado la duda, por no decir la certeza, de que no hay absolutamente ninguna razón que justifique este trámite por la vía del Decreto-ley.

Independientemente de las afirmaciones que ha hecho el señor Arnau, yo querría justificar la postura del Grupo Parlamentario Comunista, diciendo que vamos a votar en contra, y que, en caso de que el Decreto-ley fuera convalidado, pedimos, desde ya, su tramitación como proyecto de ley.

La justificación de este voto en contra es doble. Por un lado, por estimar que no concurren en absoluto las razones constitucionales exigidas en el artículo 81: «extraordinaria y urgente necesidad»; y querría decir, además, que me parece insólito que en una única sesión del Congreso se presenten a convalidación siete Reales Decretos-leyes. Estamos convirtiendo lo que es excepcional en la Constitución en un trámite ordinario del Gobierno para solucionar por esta vía lo que no pueden solucionar los Departamentos correspondientes en función de una previsión que deberían tener como tales Departamentos. Pero, además, por entender que este Decreto-ley concretamente vulnera otro de los apartados del artículo 86, el que se refiere a los temas que un Real Decreto puede legislar, y creemos que, por un lado, este Real Decreto-ley, en su artículo 5.º, vulnera los derechos de los ciudadanos, al dejar a la discrecionalidad del Ministerio el régimen de concursos y oposiciones, cuando el artículo 23, 2, señala que el acceso a la función pública se hará en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, de acuerdo con lo que establecen las leyes, no lo que disponen los Reales Decretos-leyes, que no pueden legislar precisamente respecto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y, por otro lado, a pesar de una pincelada absolutamente incomprensible que ha hecho el señor Arnau respecto a cuál era el sentido de este artículo 5.º, que me ha parecido entender que era por adaptarlo a los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas —cosa que luego no ha explicado—, nosotros entendemos que precisamente lo que viene regulado en los Estatutos de esas Comunidades ya lo está allí y no hay que dar tampoco ningún cheque en blanco al Gobierno ni al Ministerio correspondiente para que regule lo que tiene en los Estatutos, concretamente en su Disposición transitoria sexta, una regulación específica.

El segundo orden de razones por el que nuestro Grupo no va a aceptar esta convalidación es algo que ha explicado el Diputado socialista. Este Real Decreto-ley es una mezcla, es una componenda absolutamente insólita de preceptos, en donde se pasa de las plantillas a los suplementos de crédito, a las becas para niveles no obligatorios, a la mo-

dificación del presupuesto del Patronato de Promoción de la Formación Profesional, y se acaba con la modificación del régimen de oposiciones y concursos. Es realmente un prodigio de imaginación legislativa que el señor Otero le ha dejado al señor Ortega, para que tenga una herencia absolutamente favorable en su primera intervención como Ministro de Educación ante el Pleno, y yo espero que no encuentre en los cajones del Ministerio más restos de este estilo que obliguen a defender algo en lo que yo creo que, en conciencia, el nuevo Ministro no puede, por su fino sentido jurídico, estar en absoluto de acuerdo.

Pero yo querría ir al análisis de las partes y a explicar por qué —ya que no se ha explicado en la intervención a favor— aquí no hay la menor urgencia posible.

Ampliación de plantillas. Yo quiero decir que el Grupo Parlamentario Comunista está a favor de la ampliación de plantillas y que así lo dijo cuando el 27 de junio, a las ocho de la tarde, en la última sesión del período de sesiones correspondiente a febrero-junio, se nos trajo este tema; se dijo en esta tribuna, y lo dije yo misma, que nosotros aceptábamos esa ampliación, pero que no podíamos coincidir en el número, porque no se nos había dado ninguna justificación del mismo. Yo quiero decir, Señorías, que aquí tenemos un baile de cifras absolutamente incomprensible, y les voy a dar algunos datos, limitados a EGB.

Por un lado, tenemos una cifra de 157.094 plazas, que son las presupuestadas en la plantilla en trámite; luego tenemos 152.726, que eran las que figuraban en Presupuestos de 1980; después tenemos 160.021, que son las que vienen en este Real Decreto-ley, y luego tenemos unas declaraciones del inefable señor Otero, en el mes de junio de 1980, en las que decía que eran imprescindibles 162.021. ¿Cuál es la buena? ¿Tenía razón el señor Otero al pedir 2.000 más de las que ahora se nos pide que convalidemos? ¿Son las que ahora se nos pide las realmente necesarias? ¿Eran suficientes las plantillas que aprobamos el 27 de junio? Yo ya sé que no eran suficientes las plantillas de junio. Lo sabe UCD y lo sabe el Ministro, pero ¿por qué el Ministro y UCD no optaron por la vía de enmiendas a su pro-

pio proyecto de ley de ampliación de plantillas? La explicación que entonces se dio y que justificó una demora absolutamente injustificable de seis meses es que Hacienda no daba el dinero. Yo supongo que si el calor estival calentó la mentalidad del señor Otero, también debió calentar la mentalidad del señor García Añoveros, pues a lo que había dicho que no en el mes de junio, dice que sí en el mes de agosto.

Señorías, esto no es serio. La Educación General Básica, las plantillas de todos los Cuerpos de la enseñanza son algo mucho más serio que los calores estivales; son algo mucho más serio como para que UCD aparezca planteando cifras distintas cada tres meses; son algo mucho más serio como para que cada año tengamos que ampliar plantillas sin saber cuál es el cupo provincial, sin saber cuál es el cupo por niveles, sin saber por qué se amplían las plazas. Esto no es serio, y el Grupo Parlamentario Comunista no acepta la vía de Real Decreto-ley, diciendo que si no se convalida éste las personas que hayan ganado oposiciones en el mes de agosto no van a ver recogido lo que han ganado en las oposiciones, esto no es aceptable.

El Gobierno tiene la posibilidad de presentar por la vía de urgencia un proyecto de ley, con una memoria justificativa del por qué de cada una de las plazas que amplía, y el Grupo Parlamentario Comunista colaborará para que este proyecto de ley se tramite antes del 31 de diciembre. Lo que nosotros no podemos aceptar es que se nos presenten hechos consumados, y que estos hechos consumados, además, no tengan la menor memoria justificativa. Ya está bien que cada tres meses haya errores de cálculos que oscilan entre el 5 y el 10 por ciento, ¿qué hacen los funcionarios del Ministerio de Educación? ¿Cómo calculan? Yo pienso que deben saber calcular, quizá su problema es que sus cálculos luego no llegan, pero yo le pido al nuevo Ministro de Educación que haga calcular bien a sus funcionarios, que nos traiga estos cálculos a la Cámara y que, con los cálculos bien hechos, vayamos a aprobar las plantillas que necesitamos.

Además hay otro tema, el de la Formación Profesional, que el señor Arnau conoce tan bien. ¿Por qué no se ha puesto en orden la Ley

General de Educación en materia de Cuerpos de Formación Profesional? Porque aquí ampliamos los Maestros de Taller; efectivamente, pero éste es un Cuerpo que no existe. Señorías, yo ya lo he dicho tres veces desde esta tribuna, y lo seguiré repitiendo mientras nadie me haga el menor caso, porque yo no puedo crear esos Cuerpos. Pero es absolutamente intolerable que, terminado ya el plazo de aplicación de la Ley General de Educación, sigamos con el Cuerpo de Profesores Numerarios y de Maestros de Taller, cuando lo que tendríamos que tener es el de Catedráticos y Agregados de Centros de Formación Profesional, con lo cual arreglaríamos otro problema, que es el de los coeficientes de esos Cuerpos y arreglaríamos el problema de la dedicación de esos profesionales, que al estar hoy tan mal pagados como están, evidentemente no se pueden dedicar si quieren vivir, y en principio quieren vivir, a la Formación Profesional.

Ampliación, por otro lado, de las plantillas, y sigue sin aclarar la diferencia de algo que es tan obvio para quien conoce la enseñanza, como es la plantilla legal, la plantilla oficial y la plantilla real. El señor Arnau nos ha dado unas cifras, que yo no me he tomado la molestia de copiar, por no poder contrastarlas en el momento en que las estaban dando, sobre los sustitutos, etc. No dudo que se está haciendo un gran esfuerzo para contratar más sustitutos, pero seguramente este esfuerzo habría que contrastarlo y ver si corresponde.

Yo querría también saber cuál es la plantilla legal, es decir, plazas de centros y unidades creadas en el «Boletín Oficial del Estado», cuál es la plantilla oficial presupuestada, y cuál es la plantilla real, que eso es lo importante, Señorías, o sea, la oficial, más los sustitutos, más los contratados por créditos extraordinarios.

Repito que nosotros no nos oponemos a la ampliación de plantillas, pero queremos que ésta se haga por una ley y que esta ley traiga la memoria y que la podamos discutir.

Otro tema: créditos extraordinarios o suplementos de crédito para personal contratado. Aquí podría repetir, y les voy a hacer gracia de ello, la argumentación que di el 27 de junio. Vinieron juntos también esa vez los

Decretos-leyes o la convalidación de las plantillas y los créditos extraordinarios y ya lo hemos mezclado todo para ver si en el barullo la cosa no se entendía. No voy a repetir esa argumentación, pero sí quería decirles lo que ya denunciábamos entonces, que era ésa incapacidad, una vez más, de prever necesidades de tres meses después —no han pasado más de tres meses— y resulta que nos habíamos equivocado entonces en un 10 por ciento. Yo me puedo preguntar si en el mes de diciembre nos habremos vuelto a equivocar, ahora en otro 10 por ciento, y tendremos que pedir otra ampliación. Repito lo mismo: no estamos de acuerdo. Hágase un proyecto de ley, tráigase la memoria, y esos datos que nos ha dado el señor Arnau, de los cuales sólo dispone él, por supuesto, que los podamos tener todos. Veamos si, efectivamente, se han contratado esos subalternos, esas personas de limpieza, cuáles son esos Institutos nuevos que se han puesto en funcionamiento, cuáles son esas necesidades, y entonces aprobaremos la concesión del crédito extraordinario.

Tema de las becas. Yo aquí tengo que decir que estoy en desacuerdo radical con la filosofía del Real Decreto-ley. El Real Decreto-ley dice: «Se adoptarán medidas para la cobertura financiera de acciones imprescindibles para lograr la ampliación del sistema de becas dirigidas a una mayor efectividad de la política de igualdad de oportunidades». Señorías, yo discrepo por completo de que la igualdad de oportunidades venga dada por la ampliación de las becas. Hago mía también —y así abrevio— la argumentación que ha dado el Diputado del Grupo Socialista respecto a qué es lo que en el fondo supone esa ampliación de 530 millones, que, efectivamente, va más allá de los 2.000 millones. A mí me gustaría ver cómo, si aquí se convalida ese decreto, podremos modificar por la vía de los Presupuestos, algo que ya habría sido concedido a las familias, y que, por tanto, difícilmente se les podría quitar. Porque no es cierto que aquí sólo estemos comprometiendo 530 millones; si aceptamos esta convalidación estamos comprometiendo los 2.000 millones de pesetas, porque nadie podrá quitar a una persona que ha recibido una beca la posibilidad de que continúe con ella a lo largo

del curso. Por lo tanto, seamos serios; no estamos hablando de 500 millones, sino que estamos hablando de 2.000 millones. Pero el problema no es si hablamos de 500 o de 2.000 millones, sino cómo nosotros, cómo desde este Parlamento se defiende la idea del acceso igual de todo el mundo a la enseñanza. Y aquí hay dos concepciones claramente diferenciadas.

No voy a entrar tampoco en esa polémica, pero repito que éste no es tema que se tenga que dilucidar por la puerta falsa, extraordinariamente urgente, de un Real Decreto-ley, sino que es una polémica de fondo, que yo celebro que el señor Ministro proclamara en su intervención ante la Comisión que quería que fuera abierta, profunda y seria; y, en cambio, por una herencia envenenada que le han dejado, señor Ministro, se está viendo usted obligado a introducir una dinámica que espero, por coherencia con lo que usted dijo, que no es la que este nuevo Ministerio quería hacer.

Por otro lado, nosotros mantenemos el criterio de que esta promoción de igualdad viene por la ampliación de la red, viene por la escolarización en preescolar en la red estatal, viene por el incremento de escolarización en los niveles superiores.

El tema del Patronato de la Formación Profesional. Y aquí voy a hablar de algo que me afecta personalmente. Hace seis meses, Señorías, yo presenté a esta Cámara una pregunta sobre la cuota de Formación Profesional, y el señor Otero ha necesitado seis meses para contestar, y me contestó hace dos días. En la respuesta de hace dos días me da unas cifras realmente curiosas, porque yo pedía el estado de los últimos cinco años; se ha pasado en estos últimos años 1975-79 de los 5.200 millones a los 24.619 millones, y el pico correspondiente. Pero a mí lo que me interesaba es lo que tocaba a Educación, a mí lo que me interesa es lo que le toca al Patronato. ¡Ah! Esto ya no me lo dice. Me da un baile de cifras sobre porcentajes de los distintos Ministerios, con lo cual yo —que soy profesora de griego— me siento absolutamente incapaz de saber qué es lo que realmente tiene el Patronato.

Pero me dice algo que sí me interesa; que por acuerdo del Consejo de Ministros, de fe-

cha 3 de agosto de 1979, se sentaron las bases para una nueva distribución de la cuota, para decirme a renglón seguido que el Consejo de Ministros todavía no ha aprobado esas nuevas bases y que, por tanto, se sigue haciendo de una manera tradicional; tradición que viene desde el año 1955, con decretos y leyes que la van cambiando, pero sin saberse cómo la cambian, y que en medio de ese dilata, de un acuerdo del Consejo de Ministros que no se ha cumplido, ahora damos una puerta a una nueva creación de conceptos y, además, para broche de oro, esa nueva creación de conceptos es atribuible a todos los Ministerios que tienen algo que ver con la Formación Profesional, pero sobre todo para subvencionar a la enseñanza privada de Formación Profesional de segundo grado, que no es obligatoria.

El señor Arnáu también nos ha dado otro baile de cifras. Yo estoy encantada de que los Diputados de UCD tengan mucha más información que los del Grupo Parlamentario Comunista. Eso es lógico, pero —claro— yo no puedo creerme, sin más, unas cifras de 5.000, de 3.000 millones, y decir que en total para la privada les van a dar 461 millones, si he oído bien. Yo lo siento mucho, no me lo creo; pero, sobre todo, no puedo aceptar que habiendo una regulación acordada por el Consejo de Ministros ésta no se aplique, y que mientras no se aplique le demos carta blanca al Ministerio para que haga lo que quiera con esta cuota del Patronato de Formación Profesional.

Es un tema, Señorías, de muchos millones. Sobre este tema advierto que voy a volver, porque me parece no sé si comparable a otros escándalos económicos de los que este país, lamentablemente, es demasiadas veces protagonista. Pero es un tema en el que me temo que hay más de un escándalo económico. Voy a volver sobre la cuestión, pero mientras esa cuestión no esté clarificada —y no lo está— nosotros no podemos aceptar un cambio en esa partida, en donde no estén las cifras suficientemente claras.

Y, por último, el régimen de oposiciones y concursos. La verdad, no sé lo que dice este precepto número 5. Lo confieso, no lo sé. El señor Arnáu no me lo ha aclarado. Lo que sí veo es que aquí damos la posibilidad al Go-

bierno, al Ministerio de Educación, de que regule oposiciones y traslados según su leal saber y entender. Yo no voy a decir que el leal saber y entender del Ministerio sea malo, pero no tengo por qué crearme que va a ser necesariamente bueno.

Por otro lado, hay una cuestión que es constitucional, y es que el acceso a la función pública es un derecho fundamental regulado por las leyes. No hay, por tanto, posibilidad constitucional de dejar deslegalizado este precepto del artículo 23 de la Constitución. Por consiguiente, nosotros tampoco podemos aceptar eso.

Permitaseme, para terminar, hablar en nombre de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la cual soy Diputada por Barcelona. Es posible que ésta sea una de las razones, dentro de unos pactos que nadie conoce, que obliguen a la introducción de este apartado. Yo pienso que si hay que respetar las competencias de las Comunidades Autónomas es sobre la base, no de cláusulas incomprensibles, sino sobre la base del respeto estricto a lo que marcan sus Estatutos.

Señorías, nosotros no podemos convalidar este Decreto-ley. Ofrecemos una alternativa a los dos temas que, efectivamente, son urgentes, pero que se pueden tramitar por la vía de leyes, que son una nueva ley de plantillas y un crédito extraordinario para personal contratado. Lo demás no es tema de urgente necesidad. Hagamos la Ley de Enseñanzas Medias; discutamos la Ley de Financiación de la Enseñanza, y aquí es donde, efectivamente, podremos llegar a puntos de acuerdo o de desacuerdo, pero no vayamos a sustraer al Parlamento aquello que es función de este Parlamento. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. Se somete a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/1980, de 23 de agosto, que ha sido objeto de debate de totalidad. Les recuerdo que es votación única, de suerte que votar sí es votar por la convalidación y votar no es votar por la derogación.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 163; en contra, 132; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley 7/1980, de 23 de agosto, de medidas urgentes para la iniciación del curso escolar 1980/1981, ampliación de plantillas de Cuerpos docentes y concesión de suplementos de crédito para ayudas de enseñanza y contratación de personal docente y auxiliar. (Pausa.)

¿Qué desea la señora Rubies?

La señora RUBIES GARROFE: Para explicación de voto.

El señor PRESIDENTE: No ha lugar.

Vamos a preguntar a la Cámara si algún Grupo Parlamentario desea que se someta a decisión del Pleno la posible tramitación de este Decreto-ley como proyecto de ley, conforme a la Constitución. (Pausa.) Lo había solicitado ya en su intervención el Grupo Parlamentario Comunista. Hay, por lo menos, dos Grupos que lo solicitan.

Tiene la palabra el señor Herrero Rodríguez de Miñón.

El señor HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑÓN: El Grupo de UCD también se une a esa petición.

El señor PRESIDENTE: Se somete, pues, a votación si el Real Decreto-ley, que ha sido convalidado, es o no objeto de tramitación como proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 298.

El señor PRESIDENTE: Queda acordada la tramitación del Real Decreto-ley, ya convalidado, como proyecto de ley y por el procedimiento de urgencia, conforme al artículo 86 de la Constitución.

— 8/1980, DE 26 DE SEPTIEMBRE, SOBRE FRACCIONAMIENTO EN EL PAGO DE ATRASOS DE PENSIONES DERIVADAS DE LA GUERRA CIVIL.

El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 8/1980, de 26 de septiembre, sobre fraccio-

namiento en el pago de atrasos de pensiones derivadas de la Guerra Civil.

Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (García Añoveros): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la declaración del Gobierno, que obtuvo en el mes de septiembre la confianza de esta Cámara, decía, entre otras cosas, que el Gobierno procedería a tomar actitudes de moderación en el crecimiento de los gastos corrientes. Ese criterio ha inspirado —como en su momento se pondrá de manifiesto en los debates oportunos— la redacción del proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1981. Y dentro de esta política presupuestaria se enmarca el significado de este Decreto-ley, que se somete a la Cámara para ser objeto de convalidación.

Fundamentalmente a finales de 1979 y mediados de 1980, se han aprobado leyes relacionadas con pensiones derivadas de la guerra civil, que han dado lugar a un incremento de gastos corrientes por pago de pensiones.

Al confeccionar los Presupuestos para 1981, y de acuerdo con los datos de que se pudo disponer, después de la experiencia en la resolución de expedientes de concesión de pensiones derivadas de estas leyes, hacia mediados de año se comprobó lo siguiente: para el año 1980, los gastos por pensiones de clases pasivas, a consecuencia de estas leyes, se iban a incrementar en una cantidad de 55.000 millones de pesetas, y para el año 1981 esta cantidad sería de 130.000 millones de pesetas.

Quiero recordar que la previsión de gastos por clases pasivas, que no tenía en cuenta estas leyes, aún no aprobadas en el momento de mandar los Presupuestos para 1980, eran para este año de 149.000 millones de pesetas, y que para 1981, si no se establece corrección alguna —que es lo que pretende este Decreto-ley—, los gastos por pensiones de clases pasivas ascenderían a 309.000 millones de pesetas.

El Gobierno se encontró con que, para encajar una política de incremento de las inversiones públicas, era absolutamente necesario moderar el crecimiento de los gastos co-

rrientes. Si no se introducía moderación alguna en éste o en otro concepto de gastos corrientes, éstos crecerían el 29 por ciento para 1981, lo cual haría que el proyecto de Presupuestos enviado hubiera tenido un déficit superior al actual, además, en 70.000 millones de pesetas, o inversiones en menos de 70.000 millones de pesetas, o mayores impuestos por valor de 70.000 millones de pesetas, porque lo que con este Decreto-ley se persigue —estoy hablando de los aspectos económicos y presupuestarios— es aliviar el pago de gastos corrientes por pensiones en 70.000 millones de pesetas para el año 1981.

Dentro de las medidas de moderación en el crecimiento de los gastos corrientes, ésta fue una. Otras se contienen en el proyecto de ley de Presupuestos directamente, porque no era necesario introducirlas aquí, como, por ejemplo, la que produce el aplazamiento de parte de los gastos militares, por valor de 20.000 millones de pesetas, suspendiendo la aplicación de la Ley específica de la Financiación de las Fuerzas Armadas. Esta, repito, es por importe de 70.000 millones de pesetas. Gracias a esta medida y si el Decreto-ley se ratifica, el Presupuesto de gastos corrientes para 1981 se puede presentar con un crecimiento del 21 por ciento, porque se consignan sólo por concepto de estas pensiones 60.000 millones de pesetas. De no ser así, habría que consignar 130.000 millones y los gastos corrientes crecerían al 29 por ciento, como he indicado con anterioridad.

Estas son las cuentas y los fríos números, en un asunto que evidentemente no es de números exclusivamente, ni mucho menos.

Quiero indicar que, según el criterio del Gobierno, no ha sido posible operar en cuantía significativa equivalente sobre otros conceptos de gastos corrientes. Naturalmente, no quiero anticipar aquí un debate presupuestario, pero puesto que este Decreto-ley, aprobado el mismo día en que el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Presupuestos, el 26 de septiembre, se enmarca en la política presupuestaria de 1981, no tengo más remedio que aludir a ello.

No se podían reducir las subvenciones o la participación de los Ayuntamientos y de las Diputaciones en los ingresos del Estado, que son gastos corrientes de cuantía importante

para operar; no se podía reducir el aumento de la participación o de la subvención del Estado a la Seguridad Social, que es del 50 por ciento; no se podía tomar una decisión de mayor moderación, porque hubiera sido incoherente con la proclamación del Gobierno en la subida de retribuciones de los funcionarios públicos. Y, realmente, si se analiza el conjunto de gastos corrientes, no había otro sitio donde operar. En cualquier caso, ésta fue la decisión.

Este Real Decreto-ley contiene, por otro lado, en esencia, Disposiciones que se refieren a la distribución de la carga financiera del mismo en varios años y, por otro, contiene tres Disposiciones que establecen rectificaciones leves a la normativa a la que se refieren, siempre con respeto absoluto al principio de continuidad de estas leyes.

Las leyes a cuyo aplazamiento parcial afecta este Decreto-ley, son leyes que han concluido, como aquí se dijo acertadamente cuando se aprobó la última o la penúltima de ellas, ciertas consecuencias derivadas de la guerra civil.

No es propósito del Gobierno ni del Grupo Parlamentario en que se basa modificar para nada esta legislación. La guerra civil, incluso con sus consecuencias financieras, con el reconocimiento de los derechos sustanciales, está terminada, y no pretendemos establecer ninguna rectificación ni ningún criterio de modificación, salvo estos tres puntos de detalle a los que luego me referiré.

La Disposición más importante de este Decreto-ley consiste en lo siguiente: Cuando se reconocen las pensiones derivadas de estas leyes —luego diré cuales son—, hay que pagar unos atrasos, ya que estas leyes producen efecto pleno en algunos casos desde 1976, y en otros casos desde 1978, y al reconocerse la pensión a una persona no sólo cobra a partir de este momento en la nómina la mensualidad correspondiente, sino, además, unos atrasos. Lo que aquí se hace es atrasar el cobro de parte de esos atrasos.

Hay que explicar también que la pesada carga financiera de estas leyes para 1981 se debe fundamentalmente a que al reconocerse en el año 1981, según está previsto, la mayor parte de estas pensiones, es este año cuando se acumulan la mayor parte de los atrasos.

Todavía quedará algo para 1982, y luego me referiré a los números.

Dada la falta de antecedentes que había cuando se aprobaron estas leyes —explicable en general— tanto en la Administración como en los Grupos Parlamentarios proponentes, a pesar de la buena fe que se puso en los cálculos, no se pudo prever con cierta aproximación lo que esto iba a suponer económicamente en cuanto a número de pensiones y en cuanto a volumen total de gastos.

El volumen total de gastos que estas leyes suponen, digamos a cuota anual a niveles de pensión del año 1980, es de unos 60.000 a 65.000 millones de pesetas; pero en 1981, al pagar atrasos de gran parte de las pensiones, se produce una acumulación importante, y esto la verdad es que no se sabía cuando se aprobó la Ley 5/1979, y tampoco cuando se aprobaron posteriormente la Ley de Mutilados del Ejército Republicano y otras leyes que están afectadas por este Decreto-ley.

Ha habido que conocer directamente el resultado de parte de los expedientes, ha habido que conocer el número de peticionarios y valorar los porcentajes, y hay una experiencia de peticionarios que tienen razón en su petición para poder hacer una evaluación. El trabajo de evaluación realizado ha sido muy complejo y está a aquí a disposición de la Cámara.

En el artículo 1.º del Real Decreto-ley se aborda esta cuestión del pago acumulado en el año 1981, estableciendo un mecanismo que permite, como he dicho antes, un aplazamiento del pago de 70.000 millones de pesetas. Esta medida afecta, entre otras, a las pensiones de la Ley 5/1979 en favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil, al reconocimiento de las pensiones de los colectivos de Guardias de Asalto y Carabineros y a la Ley 35/1980 de Mutilados. En concreto, y según los datos de que dispongo y que pongo a disposición de la Cámara, el número de pensiones que se han de reconocer como consecuencia de la Ley 5/1979, de viudas y huérfanos de la guerra civil, es de 94.000. Parte de ellas se han reconocido —luego diré cuantas— y parte están pendientes de reconocer a lo largo de 1981. Las pensiones reconocidas como consecuencia de las leyes sobre indultos y amnistía, que

afectan fundamentalmente a los colectivos de Carabineros y Guardias de Asalto y algunos antiguos funcionarios de la Generalidad de Cataluña, en número de 64.000 exactamente, y las pensiones de mutilación serán 60.000; es decir, que este conjunto de normas ha supuesto un número de pensiones que pasan de las 200.000 ligeramente.

Téngase presente que el número de pensiones no derivadas de estas normas que existen, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, en Clases Pasivas, es de 450.000, y que el reconocimiento anual de pensiones habitual o normal es de 30.000, lo cual quiere decir que la acumulación de trabajo que se ha producido para reconocer este número de pensiones en el más breve plazo posible, en cuanto han venido a estar dependientes de su resolución en el Ministerio de Hacienda, ha sido muy importante.

La cuantía individual de estas pensiones es enormemente variada, porque variadas son las leyes y las situaciones. Las hay, por ejemplo, para 1981, si se aprueba el incremento de pensiones previsto en la Ley de Presupuestos, de 10.600 pesetas, que son las familiares ordinarias de la Ley 5/1979; de 130.000 pesetas para casos de familiares de militares fallecidos en la guerra civil; de 34.000, de 75.000, de cuantías diversas y muy variadas. La menor es la de aquellos mutilados que tienen sólo mutilación y no cobran pensión básica, que es de 3.185 pesetas.

En la instrumentación de esta medida se han tenido en cuenta los siguientes criterios: en primer lugar, pago en efectivo de una cantidad correspondiente a atrasos, de aproximadamente 100.000 pesetas en cada caso. Parecía oportuno, a la vista de las cuantías que se debían o se podían aplazar, pagar una cantidad (quedaba para pagar una cantidad), y en vez de elegir un porcentaje de los atrasos se ha elegido una cantidad lineal, con lo cual se favorece evidentemente a aquellos titulares de pensiones más bajas.

El período de fraccionamiento se ha establecido también según el volumen de los atrasos, y es de cuatro o cinco años, siendo el primer plazo de pago el año 1982, según que la cuantía de los atrasos sea inferior o superior a 500.000 pesetas. El vencimiento primero se ha hecho en 1982, porque en 1981

no se podía poner vencimiento, ya que de lo que se trata es de eliminar 70.000 millones de pesetas de 1981, y aunque en 1982 hay algo afecto a eliminación, se compensa de alguna manera.

Los intereses a devengar por el aplazamiento son del 8 por ciento, según el Decreto-ley, que son los mismos que el Estado exige cuando concede aplazamientos de pago a sus deudores. El mismo tipo de interés.

La instrumentación del aplazamiento se ha hecho como reconocimiento del derecho en el momento de reconocer la pensión con un pago aplazado, de tal manera que no se incorpora un título-valor. No es un derecho que haya que tramitar, sino un derecho ya devengado por el pensionista y, por tanto, sus sucesores, en el supuesto de fallecimiento, perciben la cantidad sin pagar impuesto alguno de transmisión, puesto que no devenga impuesto alguno. Son derechos devengados ya por el pensionista.

Finalmente, quiero indicar que el Decreto-ley, por lo que se refiere a este concepto, estas medidas no significan en modo alguno que haya una pérdida de celeridad en el despacho de los expedientes, y para eso se ha adoptado un criterio, que es que el aplazamiento es igual para todos los que están en la misma situación de tipo de pensiones. Se aplaza lo que corresponda desde el origen hasta el 1 de octubre de 1980, de tal manera que si después se reconoce una pensión en el mes de marzo del año que viene, los meses entre el 1 de octubre de 1980 y el mes de marzo se pagarán en el momento del reconocimiento de la pensión, con lo cual no existe ni siquiera la sospecha de que pueda haber un incentivo para el aplazamiento en la resolución del expediente, y se da una situación que parece más equitativa. Y, por último, en relación con la Ley 5/1979, la experiencia ha puesto de manifiesto que el plazo que expiraba en este mismo año (no me acuerdo exactamente cuando, si este mes o el que viene), según el Decreto-ley se amplía hasta junio de 1981, porque en algunos casos es relativamente compleja la búsqueda de la documentación necesaria para hacer frente a las necesidades del expediente.

El Real Decreto-ley tiene otras Disposiciones, y me quiero referir a ellas brevemente.

En primer lugar, una se refiere a la incompatibilidad de pensiones derivadas del mismo hecho causante y por el mismo empleo. Todo esto de las pensiones es un poco cabalístico, pero de todos modos revela a veces situaciones un poco chocantes.

La legislación española, y también esta legislación a que ahora me refiero, establece para el supuesto de fallecimiento en acto de servicio, sea personal militar o civil, una pensión de viudedad del 200 por ciento. Esto es lo que está establecido en la Ley 5/79: pensiones familiares del 200 por ciento.

Del juego de las distintas leyes se ha llegado a la interpretación abusiva, en nuestra opinión, de que las viudas en este caso, además —cuando eran viudas de funcionarios civiles o militares muertos en guerra—, tenían la pensión ordinaria del 40 por ciento, con lo cual se daba el contrasentido de que las viudas iban a tener, según esta interpretación o versión, una pensión del 240 por ciento, que no lo ha querido en ningún momento el legislador.

Una norma que contiene el Decreto-ley es aclaratoria y necesaria, porque como la legislación para las viudas derivadas del bando republicano no es la misma que la otra legislación, resulta que siempre las de un lado se apuntan a los beneficios del otro y surgen estas interpretaciones, que en algún caso notorio, como en éste, estimamos que son abusivas, cuando la ley claramente nunca ha dicho que haya pensiones del 240 por ciento en ningún supuesto.

Téngase presente que la viuda de un Teniente fallecido en la guerra civil, sea del bando que fuera, tiene una pensión del 200 por ciento, 130.000 pesetas mensuales, que es una pensión razonable, e incluso algunos pueden pensar que elevada; por tanto, no es necesario incrementarla con interpretaciones que estimamos abusivas.

En segundo lugar, la Ley 5/79 —y es otra medida concreta que está en el Decreto-ley— establecía una pensión en favor de las huérfanas no incapacitadas. Yo quiero recordar aquí que esto está más en correlación con la legislación de clases pasivas, que establece desde el año 1959 para los funcionarios militares y civiles del Estado que no devenguen

pensión en favor de las huérfanas cuando tengan más de veintitrés años, salvo que estén incapacitadas previamente y no tengan medios económicos; tengan pobreza legal, me parece.

La Ley 5/79 establecía esto con carácter general. Según el Decreto-ley, esto se respecta, sin limitación alguna y sin congelación para las que sean huérfanas de funcionarios militares o civiles en tiempo de guerra, pero no para las otras huérfanas, de más de veintitrés años y que no estén incapacitadas. Y las que no sean huérfanas de funcionarios civiles o militares van a percibir una pensión del 200 por ciento según la ley, en contra de lo que dice la legislación de clases pasivas.

No se elimina la pensión, sino que simplemente se congela. Se congela según el criterio del Decreto-ley, por no producir un efecto de eliminación de este tipo de pensión, que parece que no es razonable, pero, en cualquier caso, es la pensión que perciben las huérfanas que no están incapacitadas, que tienen más de veintitrés años y que no tienen pobreza legal. Parece razonable esta congelación para no crear un agravio comparativo que podría dar lugar a otra interpretación o reinterpretación en favor de otras huérfanas que no tienen esta condición.

En tercer lugar, se limita la pensión de la Ley 5/79 para las huérfanas no incapacitadas, y se limita al 100 por ciento, porque la legislación existente para huérfanas de personas fallecidas en acto de servicio, de cualquier color, era el 100 por ciento, y parece razonable acomodar al 100 por ciento en este caso, porque si no todas las demás huérfanas no incapacitadas, repito, iban a tener la retribución del 200 por ciento, lo cual no parece razonable y sería un incremento que estimamos que puede considerarse con respecto a las situaciones personales por lo menos no conveniente.

Estos son algunos de los datos de una situación que es incómoda. Pero quiero indicar más: la necesidad y la urgencia del Decreto-ley. Otra cosa es su oportunidad, en cuanto al fondo, en la que yo ya he intentado explicarme. Está claro que sin este Decreto-ley no podíamos presentar los Presupuestos adecuados ni aprobar los 60.000 millones de pesetas de pagos correspondientes

por estos conceptos al año 1981, porque si lo que hay que pagar son 130.000 millones, en los Presupuestos, de no existir el Decreto-ley, había que consignar 130.000 millones y, en definitiva, había que hacer el Decreto-ley para poder presentar unos Presupuestos coherentes.

Por otro lado, quiero indicar que es deseo del Gobierno que este Decreto-ley se tramite como proyecto de ley, y voy a explicar ahora las razones. En primer término, porque de alguna manera afecta a leyes que han sido ampliamente consensuadas en esta Cámara, y el Gobierno, salvado el problema de la presentación de los Presupuestos de 1981 y, digamos, de su déficit, no sólo no tiene inconveniente, sino que desea que sea considerado por la Cámara y se vea si hay algún detalle en el que pueda ser rectificado. El Gobierno mantendrá su criterio de aplazar el pago de 70.000 millones, pero algunas cosas pueden rectificarse con la colaboración de los demás Grupos. Por tanto, queremos que se tramite como proyecto de ley, y al tramitarse como proyecto de ley, yo quiero indicar aquí que inmediatamente pondré a disposición de la Cámara la información elaborada en la Dirección General del Tesoro sobre este tema, donde están todas las previsiones, que son enormemente complicadas, todos los cuadros, etc. Hay algunas medidas que podrían haberse introducido teóricamente en el Decreto-ley, y que no se han introducido porque carecemos de información en este momento, pero que puede que la tengamos en el plazo de tres o cuatro meses. Por ejemplo, hubiera sido quizá razonable, y podría hacerse dentro de tres o cuatro meses, que no hubiera en principio aplazamientos, o que los aplazamientos fueran por menos años o menor cuantía porcentual para las pensiones de aquellas personas que tienen una sola pensión y sea ésta, porque es cierto que muchas de estas personas tienen dos pensiones u otras retribuciones, y no deben tener la misma consideración. Lo que ocurre es que no tenemos información de cuál es este colectivo, de si los 200.000 pensionistas tienen una pensión o varias. Se han dado instrucciones en el Ministerio de Hacienda, hace un mes aproximadamente, cuando este problema se presentó, para que se pregunte a los pen-

sionistas si tienen más pensiones, pero esa pregunta puede resultar enojosa porque le parezca al que se le hace que se le está de alguna manera investigando cuando la pensión es compatible; y desde luego es compatible. Se ha dicho esto. Pero como la Ley de Presupuestos contiene un criterio de crecimiento de pensiones que implica acumulación, habrá que saber todas las pensiones del Estado y de la Seguridad Social, el número de pensiones que tienen. Si eso es así, a partir del mes de enero tendremos información sobre una muestra lo suficientemente indicativa de quiénes de estas personas tienen una sola pensión o varias, y las que tienen una sola pensión, si tienen la pensión mínima o es una pensión de 130.000 pesetas o de 75.000 pesetas, que no merece la misma consideración.

Lo mismo sucede en lo que se refiere a la edad. Muchos de estos pensionistas tienen edades que, dada la previsión media de vida, no hay que prever, en un término medio, un fallecimiento próximo, pero en otros sí hay que preverlo. No sabemos cuántos en este momento. Lo podemos saber en tres o cuatro meses. Conjugando ambos criterios, bien en la tramitación del Decreto-ley como proyecto de ley, bien, si fuera oportuno, mediante negociaciones incluso extraparlamentarias, en otro Decreto-ley se podrían introducir las correcciones oportunas para solventar los casos más extremos, que no sabemos en este momento qué significación económica tienen, qué significación de gasto público tienen, y por eso no se ha podido hacer. Nosotros esperamos tener un censo mecanizado de pensionistas del Estado dentro de dos meses, porque de pensionistas del Estado no existía y se está haciendo.

Antes he dicho que había 450.000 pensiones que paga el Estado, pero no se sabe aún exactamente el número de pensionistas, que es menor, porque varios acumulan dos o tres pensiones del Estado, aunque no sabemos en qué porcentaje. Esta información, que no existía, es necesaria para proceder de una manera coherente y sabiendo adónde se va.

El Gobierno, repito, no quiere hurtar esta discusión, no ya la discusión que estamos teniendo aquí en este Decreto-ley, sino la discusión pormenorizada en algunos temas que

han sido objeto de consenso. El Gobierno tampoco quiere hurtar ningún tipo de información, y en la medida que la tenga la irá suministrando para, bien en la tramitación como proyecto de ley o de otra manera, poder introducir las correcciones que se estimen oportunas, aunque insisto que es criterio del Gobierno aplazar el pago de 70.000 millones de pesetas por razones presupuestarias. Seguramente conociendo más datos se puede hacer mejor, aunque se ha pretendido hacer, como habrán observado SS. SS., con la mayor equidad posible, con la mayor delicadeza posible, para no afectar gravemente a determinadas situaciones.

Todas las pensiones se percibirán desde el día en que se vayan reconociendo, se cobrarán mensualmente y estarán sometidas a incremento anual. No afecta para nada al principio de compatibilidad, que está establecido en las leyes que la regulan. En esto todo sigue igual; lo único que no sigue igual es esta medida que he presentado. He querido dar esta explicación para indicar cuáles son los criterios por los que se ha elaborado así el Decreto-ley y por lo que se ha presentado a la Cámara.

Quiero indicar también que en la misma fecha, 26 de septiembre, se aprobó otro Decreto-ley, igualmente relacionado con el Presupuesto, y que será tratado en el número siguiente del orden del día. El Gobierno no quiso acumular los dos en uno, con objeto de dejar claramente aislado el tema de las pensiones. No quiso acumularlos por si a alguien le podía interesar un tema y no el otro. Es decir, no ha querido introducir ningún factor de oscurecimiento en el tema de las pensiones, que queremos quede bien claro. Lo exponemos con claridad y, en ese sentido, aquí está.

Ciertamente, cuando se aprobó la última de las leyes, yo subí a esta tribuna a decir que aquello suponía una importante carga financiera y que habría que pagarla. El Estado la va a pagar porque tiene que hacer honor a sus compromisos, más aún cuando están derivados de una cuestión que afecta a la resolución de la guerra civil. Quizá esas leyes no fueron perfectas, quizá podrían haber sido mejores. En cualquier caso, cuando las íbamos aprobando en esta Cámara —y no

quiero echarle la culpa a nadie, ni a los Grupos proponentes— el hecho es que no supimos lo que de verdad tenían dentro; se decía que serían 40.000 ó 60.000 millones, pero en realidad no se sabía, no había modo de saberlo. Si hubiéramos sabido entonces cuáles iban a ser las consecuencias económicas de las pensiones del año 1979, a mí no me cabe ninguna duda de que no habría habido ningún inconveniente por parte de los Grupos proponentes en haber establecido un mecanismo de pago aplazado de los atrasos hasta 1979. No me cabe duda por el ambiente de conformidad que había con estas leyes, por el deseo que había de sacarlas, porque era un problema acuciante, y yo, ahora, planteo este problema, en relación con el cual pido la ratificación y ruego que se acepte su tramitación como proyecto de ley por las razones indicadas. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el debate en relación con este Real Decreto-ley.

¿Grupos Parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) Los Grupos que han pedido la palabra para intervenir en este debate son: Grupo Parlamentario Vasco, PNV; Grupo Parlamentario Minoría Catalana, Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, Grupo Parlamentario Comunista, Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y Grupo Parlamentario Centrista.

Interviene en primer lugar, para consumir un turno en contra, el Grupo Parlamentario Comunista. Tiene la palabra el señor Bono.

El señor BONO MARTINEZ (don Emérito): Señor Presidente, Señorías, el Real Decreto-ley cuya convalidación se propone hoy a la Cámara viene a modificar, como ha explicado aquí el señor Ministro, dos leyes: una, la Ley de Viudas, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y otra, la Ley sobre Mutilados de Guerra del Ejército Republicano, del Grupo Parlamentario Comunista.

El señor Ministro ha dado una serie de razones de carácter económico —a las que a lo largo de esta intervención me referiré— que me parece importante escuchar, pero el problema de fondo, el problema político funda-

mentalmente, el señor Ministro lo ha soslayado.

Anteriormente, mi compañera de Grupo Laly Vitró se ha referido a este procedimiento de legislar por la vía del Real Decreto-ley, que no nos parece la más conveniente, pero en este caso el asunto es todavía peor, dadas las vicisitudes por las que han pasado estas dos leyes, concretamente la Ley 5/79 y la Ley 35/80, leyes difíciles en cuanto a la negociación y en cuanto a la discusión.

En este sentido es tirar por la borda de la noche a la mañana, mediante un Decreto-ley, repito, la labor de muchos meses de discusión; la labor, en definitiva, de intentar buscar eso que en esta Cámara se ha repetido muchas veces y en lo que no nos cansaremos de insistir: la concordia, la reconciliación entre las dos Españas que quedaron divididas durante y después de la guerra civil.

Las dificultades en aprobar estas dos leyes, sobre todo la Ley 35/80, que es la que más directamente viví, y también la Ley 5/79 —la Ley de Viudas—, no han sido dificultades propiamente presupuestarias, aunque las ha habido (evidentemente ha habido elementos de carácter presupuestario que han jugado un papel), sino que han sido dificultades de diverso tipo, yo diría dificultades entre comillas, para entendernos, y también dificultades de carácter político.

Pues bien, es curioso que después de cuatro meses de puesta en vigor —concretamente en junio de 1980— la Ley sobre Mutilados de Guerra del Ejército Republicano, justamente cuatro meses después, el Gobierno nos presente un Real Decreto-ley a través del cual se enmienda lo que hace cuatro meses —repito— hemos aprobado prácticamente por unanimidad en esta Cámara.

Esto, como comprenderá el Gobierno y como comprenderá el señor Ministro, es un problema realmente serio, porque en estas leyes, como he dicho antes, nos ha costado mucho negociar y discutir, y para llegar al final a un consenso todos hemos tenido que ceder mucho.

Yo recuerdo que en la proposición de Ley sobre Mutilados de Guerra del Ejército Republicano del Grupo Parlamentario Comunista, exigíamos que se pagaran diez anualidades, por lo que no habían cobrado estos ciudada-

nos durante los últimos cuarenta años, sin embargo, sacrificamos esta petición para que, de alguna forma, saliera una ley consensuada y cobraran los atrasos desde tres años hacia acá, prácticamente desde que comenzó el proceso democrático.

No obstante, con este Decreto-ley les estamos hurtando también a estos ciudadanos el derecho a poder decir que el proceso democrático que estamos construyendo también los está integrando a ellos, también les está reconociendo lo que han sacrificado por el mismo, porque en un momento determinado lo dieron todo por las libertades en nuestro país. En ese sentido se sienten marginados, se sienten extorsionados y, desde luego, se sienten ciudadanos de segunda, porque otros han estado cobrando durante los últimos cuarenta años.

Ya sé que se me va a decir que estamos fraccionando un pago y que, por tanto, no se les niega el mismo. Efectivamente, estamos fraccionando un pago y no se les quita lo que se les adeuda, pero tengo que decir que en estos casos es difícil fraccionar; no se pueden fraccionar cuarenta años de sufrimiento y, en muchos casos, de persecución en situaciones realmente difícilísimas. Eso no se puede fraccionar. Y esto es un problema de justicia profunda, que, de alguna forma, ese Real Decreto-ley viene de nuevo a echar abajo.

Nos preguntamos si con este Real Decreto-ley no estaremos desvirtuando el sentimiento profundo de concordia y de reconciliación que tenían ambas leyes, y lo preguntamos seriamente. Recuerden Sus Señorías que en el preámbulo del Decreto-ley 35/1980 se dice algo como esto: La necesidad de superar las diferencias que dividieron a los españoles durante la pasada contienda, cualquiera que fuera el Ejército en que lucharon, hace que sea obligado establecer igual trato a aquellos ciudadanos que, habiendo quedado mutilados como consecuencia de la guerra civil 1936-1939, no tuviesen aún suficientemente reconocidos sus justos derechos.

Esto es lo que dice el preámbulo y nosotros nos preguntamos si no estaremos desvirtuando el sentido de una ley que aquí, prácticamente por unanimidad, hemos aprobado.

No quiero imaginar que este Real Decreto-ley pretenda desvirtuar lo que hemos dicho,

ya que, de alguna forma, se trata solamente de aplazar unos pagos que se pagarán después, y así seguimos en la línea de la concordia. ¿Pero eso mismo lo van a pensar los afectados? ¿Los afectados van a sentir que realmente este Real Decreto-ley lo único que pretende es dilatar unos pagos y no discriminarles como hasta ahora? ¿Lo van a pensar ellos?

Aquí tengo una carta escrita por una viuda, que dice así: «El descontento que reina entre los afectados y sus familias es grande. No comprendemos cómo inesperadamente se frustran las ilusiones de unas mujeres ancianas que, después de haber sido marginadas tantos años y que creían haber alcanzado una pequeña parte de sus reivindicaciones, se las vuelve a dejar en la marginación y desamparo. No comprendemos cómo una ley aprobada por las Cortes, que sólo podíamos aceptar como punto de partida, que no nos gustaba, dadas las diferencias de trato con otras prestaciones por las mismas causas, y que, además, no se cumplían en su totalidad —las prestaciones de la asistencia sanitaria—, es corregida sin previa discusión de las Cortes, de acuerdo con la Constitución». Una vez más, la cuerda se rompe por lo más débil.

Y dice más adelante: «La media de edad de las viudas de guerra de Asturias es de setenta y seis años, y el porcentaje de fallecimientos, durante el tiempo de tramitación de los expedientes de la pensión, de más del 20 por ciento, con tendencia a aumentar. Es lamentable que a la hora de legislar no se haya tenido en cuenta que, además de tratarse de mujeres marginadas durante tantos años, cuentan ya desgraciadamente con pocos años de esperanza de vida».

De alguna forma, con este Real Decreto-ley lo que estamos es dándole la razón a esta viuda que escribe con el corazón, que escribe con la vivencia de lo que a ella y a otras les ha pasado y, en este sentido, evidentemente estamos —creo yo— cometiendo un error.

Otra carta que he recibido también, en este caso de un mutilado de guerra del Ejército republicano, me dice que, «de alguna forma, este Real Decreto-ley puede suponer que todavía no ha estallado la paz y la justicia que debe comportar la naciente democracia es-

pañol». Estas son las palabras textuales de un mutilado de guerra del Ejército republicano.

Pero es que hay más, y está vinculado a lo anterior. Esta ley ya ha abierto expectativas concretas a nivel de los afectados. Todo el mundo ha hecho sus planes, todo el mundo, de alguna forma, se ha sentido un tanto aliviado, y de la noche a la mañana eso se viene abajo, eso ya no sirve para nada. En este caso, evidentemente, tenían razones para alborozarse, dado que esta ley se aprobó por unanimidad y, justamente, cuatro meses después de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», se trae a la Cámara un Real Decreto-ley que, de alguna forma, trunca esas esperanzas, esas posibilidades y merma esos derechos que son propios de estos ciudadanos.

El Ministro ha dado aquí una información, una serie de datos bastante interesantes —algunos ya los conocía— y ha dicho una cosa que me parece fundamental y es que, evidentemente, hasta hace poco no conocíamos exactamente cuál era la realidad del número de afectados. Esta es una verdad elemental, grande, amplia; pero él, dijo en su intervención, cuando aprobamos la Ley de Pensiones a los Mutilados de Guerra del Ejército Republicano, después de hacer una breve evaluación del costo que podía suponer (y que evidentemente ha resultado no ser exacta) algo como esto: «Yo quiero simplemente recordar que estos datos están ahí, y que el esfuerzo para pagar estas cantidades lo tenemos que hacer entre todos. El Estado debe, y así lo hace, soportar este gasto, porque es de justicia que lo soporte, pero el Estado tendrá, de alguna manera, que hacer frente a los gastos mediante la solidaridad de todos los españoles por los mecanismos financieros o tributarios que, en su caso, se acuerden en esta Cámara».

Efectivamente, ésta era la línea de solución del problema. O sea, el problema no se soluciona con decir solamente que para recortar el aumento de los gastos corrientes del Estado tenemos que cercenar en 70.000 millones las pensiones a estos afectados, a las viudas, a los Guardias de Asalto, a los mutilados de guerra del Ejército Republicano. Son 70.000 millones, como ha dicho el Ministro, los que, a través del aplazamiento del pago, se cerce-

nan para el Ejercicio 1981. Por tanto, en vez de 130.000 millones, serán 60.000 millones los que el Estado se va a gastar.

Pues bien; yo creo que, en la línea que decía el Ministro, en la línea de esa solidaridad que todo el Estado, que todos los españoles hemos de tener precisamente en relación con aquellas personas que han sufrido mucho, que han pasado por muchas y diversas vicisitudes, y que, en muchos casos, se han dejado la piel, auténticamente, por defender nuestra democracia, 70.000 millones no es un problema tan serio, sobre todo porque hay otros mecanismos a través de los cuales se puede moderar ese aumento de los gastos corrientes por parte del Estado. Puede haber otros mecanismos; yo podía señalar algunos. Por ejemplo, ¿por qué no disminuir los gastos fiscales del Estado para el año 1981, y así, en alguna forma, aumentar los ingresos? El Ministro estará de acuerdo conmigo en que los gastos fiscales a través de las exenciones, etc., apenas han dinamizado la inversión privada en nuestro país.

Esta es una interrogación que yo me hago. Supongo que si hiciéramos una discusión mucho más amplia y profunda, y quizá otros compañeros la puedan hacer a continuación, llegaríamos a la conclusión de que esos 70.000 millones de pesetas, a pesar de los pesares, pueden obtenerse de otros lugares.

Por tanto, para mí éste no es argumento que pudiéramos llamar sustancial, no es un argumento suficiente para llevar a cabo la propuesta a la Cámara de que convalidemos este Real Decreto-ley. Este Real Decreto-ley es de profunda justicia para todos los españoles, de concordia, de reconciliación y en eso, señores, no podemos nosotros apearnos un ápice; debemos seguir esa línea, porque ésa es la línea correcta. Y en ese sentido, repito, los 70.000 millones de pesetas de aplazamiento de pago no es —para nosotros, al menos— de donde se ha de sacar esa disminución del gasto corriente; se puede hacer por otros procedimientos, por otras disminuciones de gasto o por la vía de aumento de ingresos a través de la disminución de gastos fiscales, como he indicado antes.

Pero es que, además, este Real Decreto-ley viene también a modificar el contenido del articulado de ambas leyes. El Ministro lo ha

dicho antes, y lo ha dicho con toda claridad: que, de alguna forma, viene a puntualizar algunos deslices que en las dos leyes mencionadas ha habido. Yo creo que el Real Decreto-ley, en definitiva, viene a interpretar restrictivamente las mencionadas leyes y modificar las prestaciones a determinados beneficiarios. Repito que éste es el sentido que tienen las modificaciones que se observan en el articulado del Real Decreto-ley en relación a las leyes mencionadas.

Sorprende, por ejemplo —y él la ha citado también—, la modificación del artículo 3.º de la Ley 5/79. No parece lógico, de acuerdo con la más elemental técnica legislativa, introducir criterios interpretativos en el articulado. Menos lógico todavía es el hacerlo diciendo, en la exposición de motivos del Real Decreto-ley, que se hace en base a imperativos dimanantes de una norma general, como el Estatuto de Clases Pasivas, cuando ya se había incluido, en su día, en la Ley 5/79, la correspondiente remisión al Estatuto en la Disposición final quinta. Por tanto, en este sentido, este Real Decreto-ley también viene a modificar el contenido, interpretando restrictivamente las dos leyes mencionadas.

El Ministro ha dicho que es el deseo del Gobierno que este Real Decreto-ley se convierta en proyecto de ley, y que ya tendremos ocasión de introducir las modificaciones pertinentes, si la Cámara acepta el que este Real Decreto-ley se convierta en proyecto de ley. Pero es obvio que nosotros, no solamente por los motivos de carácter político y de significación política que antes he mencionado, nos vamos a oponer terminantemente a este Real Decreto-ley, sino también porque es restrictivo en cuanto a la interpretación de las dos mencionadas leyes. En ese sentido, creo que es restrictivo, que modifica ambas leyes y que es negativo en relación a los afectados.

Por esos motivos, nosotros vamos a votar en contra y nos vamos a oponer pertinazmente.

Yo comprendo lo que ha dicho el señor Ministro en cuanto al aumento general en la cuantía del dinero que suponen estas dos leyes, pero, repito, no comparto la tesis de que es un problema solamente económico, un problema de recortar y aplazar unas determinadas pensiones, unas determinadas deudas. No

se trata solamente de esto. Se trata de algo profundo que en esta Cámara está latiendo desde el principio de la discusión. Se trata, en definitiva, de conseguir una auténtica reconciliación entre todos los españoles, de conseguir una auténtica igualdad entre todos los ciudadanos y de que sean iguales los pensionistas del Ejército republicano que los del Ejército, en aquel momento, del General Franco. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y para fijar su posición en relación con este Real Decreto-ley, tiene la palabra el señor Bujanda.

El señor BUJANDA SARASOLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Diputado que me ha precedido en el uso de la palabra ha expuesto algunas de las razones y me evita a mí repetirlas.

Por otra parte, también quiero decir que el señor Ministro de Hacienda, en su intervención, ha aclarado alguna serie de dudas que yo tenía con respecto a la interpretación de este Real Decreto-ley.

En cuanto a la consideración del problema de las viudas y mutilados del Ejército de la República —creo que debo decirlo— más que un problema económico, lo que se trata de solucionar es un problema de justicia.

Creo que en casi todos los casos las leyes van detrás de las necesidades y, en este caso, también este Real Decreto-ley, como otros muchos que han ido saliendo anteriormente, han adolecido precisamente de esa falta de sentido social, de sentido de la oportunidad, que es el que da valor a las leyes.

Es preciso reconocer —y también hay que decirlo, ¿por qué no?— que de donde no hay no se puede sacar. Si quieren ustedes será ésta una razón de perogrullo, pero esto es así de exacto y hay que reconocer también que las cuantías de todo el colectivo son indudablemente de mucho dinero, de muchos miles de millones, pero es aquí, precisamente, donde nosotros creemos que reside un error en el planteamiento.

Si ahora se van a fraccionar los pagos durante un período de seis años, por una falta quizá de comunicación, por una falta de conocimiento exacto, de un conocimiento esta-

dístico del problema que ahora se nos plantea, resulta difícil hacer comprender que los que tienen que pagar son precisamente, por decirlo así, los de siempre, los más humildes, y no hago en este asunto disquisición ni separación de quiénes tienen que serlo, digo, simplemente, los más humildes.

Esta falta de previsión social creo que ha sido debida, precisamente, a los inconvenientes que muchas veces se han presentado en los organismos correspondientes donde había que presentar las documentaciones, porque esto, señores, sí que ha sido el cuento de nunca acabar.

Yo pediría que, por lo menos, como contraprestación a lo que ahora indudablemente se va a aprobar (mi postura era votar en contra de este Real Decreto-ley y hacer que se tramitara como proyecto de ley de urgencia) se faciliten los trámites. Lo pido como contraprestación de tipo moral, porque no solamente de dinero vive el hombre. Yo creo (hay que ser sinceros) que muchas de las situaciones de tipo económico se han solucionado; al cabo de tanto tiempo, ¡qué remedio!, porque si hubieran tenido que vivir de la pensión, hace tiempo que se hubieran muerto; pero, indudablemente, había herederos, había familiares y había también algo en el pueblo que es la solidaridad. Por tanto, más que problema de dinero, en muchos casos, aun reconociendo la deuda que se tiene para con ellos, es un problema de justicia y creo que se solucionaría muy fácilmente si en los departamentos donde se están tramitando estas documentaciones (y soy testigo de años de los inconvenientes, de las pegas, de los disimulos, de las ausencias que se están dando) se dieran facilidades.

Señor Ministro, le pido, por favor, que, ya que ahora se están tramitando estos expedientes en Castellana, 110, les diga a los funcionarios que atiendan las solicitudes, que no hagan repetir, que las gentes viven muy lejos y están muy doloridas; es un problema de justicia.

También ha apuntado el señor Bono algo que es importante: la edad. Y me refiero exclusivamente a las viudas de aquellos más humildes que, como voluntarios o no voluntarios, fueron hombres pertenecientes a uno de los dos Ejércitos, y no quiero nombrar nin-

guno, precisamente para que haya entre todos solidaridad y comprensión hacia los problemas. Creo que esas viudas que van a cobrar 7.970 pesetas mensuales merecen una atención, merecen una justicia, un reconocimiento, y estoy seguro de que si se les dijera que desde ahora tenían derecho a esta participación, se encontrarían, quizá, con la posesión de una justicia que se les ha hecho que, en parte, compensaría la pérdida de su marido.

He tomado muy buena nota de lo que ha dicho el señor Ministro y otra vez insisto en esa posibilidad de dar a los más necesitados (ojalá fuera así y el presupuesto fuera aumentando, porque eso significaría que la situación económica se aclaraba), pero, por favor, atiendan a los más necesitados, a esas viudas de los simples soldados; no me refiero ya —lo digo con todo respeto y me descubro ante ellos— a los oficiales que van a cobrar una cantidad cuantiosa con el transcurso de los años, sino a esas viudas (y no quiero hacer aquí cosas de tipo lacrimógeno, esto es contrario a mi pragmatismo), pero, por favor, atiendan a esas viudas y también, a las que tienen una única pensión, que en este caso yo supongo que serán las viudas de esa última, por decirlo así, categoría social, que no han tenido a dónde agarrarse.

Por otra parte (obvio ya declarar otra serie de cosas, no quisiera tampoco contar anécdotas, no estamos aquí para esto, según mi criterio), creo que cobrar setecientas u ochocientas mil pesetas en seis años es un plazo demasiado dilatado, aunque después tengan que cobrarlo los sucesores, a los cuales, seguramente, les va a hacer todavía menos falta. Creo que pasando precisamente a un proyecto de ley (que es por el que ahora me inclino y nuestro Grupo votará a favor) esto pudiera soslayarse; y ojalá tuviera usted suerte, señor Ministro, y los Presupuestos del año que viene pudieran hacer factible que esta buena voluntad, que la creo sincera, pudiera hacer que estos seis años quedaran en dos o en tres y pudieran aumentarse las cuantías de estas pensiones. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Minoría Catalana, tiene la palabra el señor Trías Fargas.

El señor TRIAS FARGAS: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, realmente, éste es uno de esos casos en que el tener que escoger entre lo ideal y lo real resulta especialmente penoso. Se han expuesto aquí la mayor parte de los argumentos válidos para pronunciarse a favor de lo real y de las exigencias de la vida real; y, al mismo tiempo, los argumentos que pueden inducirle a uno a mantenerse dentro de la línea de lo ideal. Esto, probablemente, nos ahorra de alargarnos demasiado, pero creo que debemos manifestar nuestro punto de vista, la posición de nuestro Grupo, aunque nada más sea para constancia de futuro.

Nosotros creemos que las necesidades económicas deben ser atendidas; no podemos un día aprobar una resolución, pidiendo la reducción de los gastos corrientes del Estado, y al día siguiente otra cosa, proponiendo lo contrario. Nosotros, además, debemos insistir en que aquí no se trata tanto de escoger entre unos gastos regidos por la economía, las inversiones, etc., sino que, probablemente, estamos teniendo que discutir entre ayudar a las viudas y a los huérfanos de guerra, y a lo mejor a los minusválidos, a los ancianos y a los menores, y, entonces, ya la decisión parece mucho más difícil, desde luego, desde el punto de vista ético, aparte de las consideraciones de praxis económica.

Entonces, también hay que aceptar que estas leyes, con la mejor voluntad, han producido, si se aplican de una manera directa, situaciones de agravio comparativo, que tampoco resultan justas; y una injusticia clara, como la que han querido enmendar, no se enmienda con otras injusticias. De manera que nosotros creemos que esta situación tiene un contenido práctico insoslayable, pero también debemos hacer constar el otro aspecto del tema.

Creemos que estas leyes que ahora, en cierta forma, quieren corregir estos decretos, fueron un intento de concordia de todos alrededor de esa gran herida que fue la guerra civil española. Pero debemos hacer constar que en nuestro partido, en nuestro campo de acción, en el campo de acción que representa la Minoría Catalana, hay una situación singular que debemos defender y respetar. Debemos decir que nuestro partido, la base de

nuestro partido, es históricamente una base que ha simpatizado, que ha militado y que ha sufrido en el bando republicano, y este hecho no lo podemos ignorar. Defenderíamos igualmente, aunque no fuera así, del mismo modo como lo hacemos ahora, las leyes que pretendieran corregir esta situación; pero es justo decir que para nosotros éste es un tema que nos afecta de una manera muy directa y especial que no podemos ignorar.

Por consiguiente, consideramos que las necesidades de una realidad económica que hay que atender y, sobre todo, como decía el señor Ministro, la falta de información que en este momento todavía existe y que permitirá probablemente en el plazo de dos o tres meses hacer correcciones a estos decretos con conocimiento de causa, estos dos argumentos nos hacen votar a favor de los decretos; pero formalmente proponemos que se vote aquí, tal como ha ofrecido el señor Ministro, el trámite como proyecto de ley de esos textos, y hemos de anticipar al señor Ministro y a esta Cámara que en ese punto, en ese trámite, seremos duros y difíciles en la defensa de unos intereses que queremos defender, especialmente porque consideramos que son un paso hacia la concordia, como se ha dicho aquí, pero también, y lo decimos claramente, porque defienden la reparación de una injusticia que se ha cometido de manera muy clara en las filas de nuestros militantes y de nuestros simpatizantes. Y en este sentido, pues, concreto, votaremos los decretos y pedimos que se vote inmediatamente el trámite de proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista de Cataluña tiene la palabra el señor Ramos.

El señor RAMOS MOLINS: Señor Presidente, Señorías, he escuchado con mucha atención al señor Ministro, y diría que si todo lo propuesto se refiriera a una situación normal, el hecho de que el Gobierno aplase unos pagos tiene una cierta lógica, y sería aceptable; pero es que esto se refiere a una situación enormemente anormal, y las circunstancias que hacen que esta situación sea enormemen-

te anormal son las que exigen unos enfoques distintos en el problema.

He oído en la exposición del señor Ministro hablar de pensiones que a mí me han parecido fabulosas. He oído también hablar de la posibilidad de abusos, de pensiones múltiples, pero me parece que éste es otro problema. Al parecer, dentro de poco más de dos meses se tendrá una perspectiva total de los pensionistas, de las pensiones, de las acumulaciones de pensiones y también de los abusos, y cuando se sepa esto con pleno conocimiento de causa, quizá proceda reestructurar unas pensiones en beneficio de la gran cantidad de pensiones que no permiten vivir, de pensiones miserables que tenemos; pero, como digo, éste es otro problema. El hecho de que esto pueda conocerse dentro de dos meses quizá me hace pensar que este Real Decreto ha sido prematuro, que tenía espera, que podía con pleno conocimiento abordarse este problema y, por tanto, ciertas matizaciones que se han anunciado para el futuro podían haberse ya tomado, porque es indudable que la liquidación de las consecuencias de una guerra civil, y de una guerra civil tan cruenta como la de 1936-39, constituyen una pesada carga. Una pesada carga moral, porque estas contiendas, indudablemente, producen una enormidad de injusticias a las cuales poco se puede hacer para repararlas y que, por tanto, ahí quedan. Indudablemente, también una pesada carga económica, porque a estas víctimas, que defendieron un régimen democrático, no se podía eludir el que al restablecerse la democracia fueran tenidas en cuenta en lo único que se les puede compensar hoy, porque no se les puede compensar en todo lo pasado, sólo se les puede compensar en lo que puedan beneficiarse y mejorar su situación en el futuro.

Yo diría también —se han dado ya muchas argumentaciones— que esto no se hace por una reconciliación, porque para reconciliarse hay que estar antes conciliado, y yo, desde luego, con el otro bando nunca he estado conciliado, sino, simplemente, por un respeto democrático de no perjudicar a nadie de los que lucharon en el otro bando y mejorar la situación de los que lucharon en el bando republicano.

No voy a repetir una serie de argumenta-

ciones que se han dado con las que estoy de acuerdo.

La Minoría Catalana, como siempre, ha salido con el sí, pero que nunca se sabe en qué posición está. Yo sobre lo que le llamaría la atención al señor Ministro es que esta carga de la guerra civil queda agravada, porque las medidas se toman a los cuarenta años de haberse acabado la contienda y, por tanto, para la mayoría de estas víctimas —como también se ha dicho— esos cuarenta años han representado desde una vida difícil hasta un verdadero caminar sobre la amargura, y esto merece su atención.

Hoy esta gente tiene casi toda más de sesenta años, y algunos tienen más de ochenta años, e indudablemente todo aplazamiento supone que no van a recibir lo que se merecen, y lo que se merecen es lo que se puede llamar, más que unas medidas de justicia que son imposibles, unas medidas de gracia. Y en este aspecto, por lo menos, habría que tener ya las matizaciones. Por tanto, nosotros, en la forma rotunda como se ha planteado este decreto (decreto que, por decir así, nos contraría enormemente en su conjunto, nos contraría más por su falta de matización), tenemos que votar en contra del mismo.

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión por quince minutos. *(Pausa.)*

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Proseguimos el debate del Real Decreto-ley 8/1980, de 26 de septiembre.

Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor Ramos Fernández-Torrecilla.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, los socialistas nos oponemos a la convalidación de este Real Decreto-ley porque nos parece, honradamente, que es injusto.

Yo quiero agradecer al señor Ministro de Hacienda que haya subido a la tribuna a explicar las razones del Gobierno, a analizar

concienzudamente los problemas de este Real Decreto-ley, pero yo creo que el Gobierno no es solidario.

Porque todos los Ministros no suben a explicarnos los Decretos-leyes y, sobre todo, porque en la inmensa mayoría de los casos todos los Grupos de la oposición encontramos que no hay razones bastantes, ni suficientes, ni de urgencia, para justificar que se adopten estas medidas tan trascendentales, cuando las Cámaras están reunidas y trabajan ordinariamente.

Nos oponemos, repito, porque nos parece injusto que cuando el Gobierno pretende aplicar su política económica —si es que la tiene—, de lo único que se acuerde sea de aplazar el pago a las viudas o a los mutilados de guerra.

Qué duda cabe que estamos de acuerdo con que no se pueden aumentar más los gastos corrientes para que aumenten los de inversiones. Ya lo dijimos nosotros y ahora se dan ustedes cuenta de ello. Pero el problema, señor Ministro de Hacienda, es que siempre se rompe la cuerda por el mismo sitio. Siempre se rompe la cuerda en contra de los mismos. Y estaría bien que una vez esas razones de interés nacional y esa política económica permitieran que la cuerda se rompiera por otro lado. Por ejemplo, podía usted, señor Ministro, haber subido a la tribuna para anunciarnos que la asistencia sanitaria a esos pensionistas, que se aprobó en la Ley 5/1979, se iba a poner en práctica. Y que no se nos hubiera dicho, como lo hizo el Director General de la Salud en la Comisión correspondiente, que cuando se hubieran terminado todas las pensiones se trataría de poner en marcha la asistencia sanitaria.

Siempre se rompe la cuerda por el mismo lado. Porque, además, para las viudas de guerra del bando republicano —y usted lo sabe muy bien— esta ley ha sido, y es todavía en muchos casos, de difícil aplicación, ya que les resulta —como muy bien lo ha reconocido usted— difícil aportar la documentación necesaria de los que murieron en los campos de concentración o de los que murieron en otras zonas. Y, sin embargo, señor Ministro —es lamentable y no tiene nadie la culpa, pero es la verdad—, a las viudas del llamado bando nacional no les causa problemas reque-

rir la documentación precisa, porque esas defunciones están perfectamente inscritas, diciendo que murieron gloriosamente por Dios y por la Patria.

Es una pena, señor Ministro, que siempre se rompa la cuerda por el mismo lado. Porque a las viudas del bando nacional no les va a afectar este Decreto-ley, pues la mayoría de ellas ya han cobrado, señor Ministro de Hacienda. Habrá que buscar otra fórmula.

Los mutilados del bando republicano no han cobrado y han estado soportando vejaciones. Sin embargo, los del otro lado sí han cobrado.

Si queremos realmente seguir el espíritu de la reconciliación nacional, de la reconciliación entre los españoles, tendremos que repartir de una manera solidaria las cargas. A lo mejor si unos vieran que se reducía su pensión, o que no aumentaba, se podía pagar a los otros. Pero siempre se rompe la cuerda por el mismo lado.

Nos cuesta oír que si se hubiera sabido el número de los que tendrían derecho a estas pensiones quizá se hubieran hecho las leyes de otra manera. Nos cuesta oír esto. Quizá hubiéramos preferido oír decir al señor Ministro de Hacienda que hay abusos, porque hay muchos desaprensivos en este país que, incluso en este tema tan delicado, se permiten jugar; y que nos hubiera dicho que esos abusos se iban a corregir y que se pedía la colaboración del Parlamento y de todos los Grupos Parlamentarios para ello. Quizá habríamos estado de acuerdo. Pero pasar de 70.000 millones a cero nos parece excesivo. Nos parece que podría haber situaciones intermedias.

Lo que desde luego puedo asegurarle es que esto va a afectar a esas viudas que no tienen otra pensión y que no cobran 130.000 pesetas, sino que cobrarían 7.900, pero todavía no han podido conseguir el certificado de defunción de sus maridos, que desaparecieron en los campos de batalla.

Nos cuesta también oír, y es triste que se nos diga, que no se sabe si tienen otra pensión. Que consulten por el ordenador de la Seguridad Social. Que miren. Que lo tienen en la propia Administración. Que no adopten, por favor, esas medidas tan elementales como que a un pensionista que no cobra más

que una pensión —y esto ha pasado en mi provincia— se le rebaje ésta automáticamente para que proteste. Porque los hay que ni siquiera protestan, porque no saben o porque no pueden hacerlo.

Creemos, además, que el aplazamiento, señor Ministro, de las pensiones cuenta con unos colaboradores que usted no pide, y que me consta, pero que están ahí. Por ejemplo, suelen pasar casi dos años para que los militares profesionales vean reconocidos estos derechos por los organismos correspondientes. Mañana va a concurrir algún alto funcionario del Ministerio de Defensa sobre este tema, a requerimiento nuestro, para saber cuáles son las razones de esas demoras. Pasa también que los expedientes se acumulan, quizá innecesariamente, y que no se tramitan en todos los casos —y sé que eso no es negligencia del Ministro, pero sí de los funcionarios a sus órdenes— con la celeridad que sería conveniente. Todo esto nos hubiera gustado oírlo en la intervención del representante del Gobierno. Pero, además, es que estas medidas no gozan de credibilidad.

Usted no puede venir diciendo que el único sitio de donde se puede sacar dinero para reducir los gastos corrientes del Presupuesto del Estado que tenga alguna importancia es de estos 70.000 millones de pesetas. Porque mire usted, cuando el señor López Rodó, en el año 1967, tuvo que tomar medidas importantes de ahorro del gasto público como consecuencia de la devaluación de la peseta para conseguir la credibilidad del país, tomó algunas medidas que luego no fueron efectivas y en muchos casos eran demagógicas, pero por lo menos a la gente le hizo pensar que aquello iba en serio, y hay Decretos-leyes suprimiendo miles de organismos que se han vuelto a recrear después, porque el aumento de la capacidad de la Administración es casi imposible de contener. También propuso aquello de que los Directores Generales —que algunos de los que se sientan en el banco azul lo recordarán porque ya lo eran— no tuvieran coche oficial, que no fue verdad, pero que, efectivamente, aquello se propuso en aquellas medidas cuando se solicitó del país la austeridad.

Usted sabe, señor Ministro, que en el presupuesto próximo van a aumentar las asig-

naciones para comida de los Ministros y de los altos cargos; usted sabe que, a lo mejor, se podían haber tocado las pensiones de los ex-Ministros de Franco, que son muchos y quedan muchos todavía cobrándolas, para haber demostrado de alguna manera que este ahorro de los gastos públicos y de los gastos corrientes es una medida solidaria que va a afectar a todo el mundo. Y que no se rompa la cuerda siempre del mismo lado; que no afecta siempre a las mismas personas; que, a lo mejor, había que haber visto algunas otras medidas recientes también.

Nosotros creíamos que estas leyes eran de reconciliación entre los españoles, que venían a reparar una situación consecuencia de una guerra civil cruenta, muy cruenta, que produjo muchas víctimas; que, efectivamente, era verdad aquello de que la guerra fue demasiado cruenta. Pero había que haber tenido alguna otra consideración. Podía haber venido el señor Ministro a la Cámara, con esos estudios que va a tener dentro de dos meses, y habernos explicado cuál era la situación y quizá la Cámara hubiera estado dispuesta a comprenderla. Pero esta medida que usted toma afecta, como ha dicho un Diputado que me ha precedido, a personas que, en muchos casos, tienen una media de setenta y seis años de edad. Pero, ¿cómo van a esperar, cómo se puede aplazar la pensión a personas de setenta y seis años de edad? Si usted hubiera propuesto quizá el que la medida se hubiera aplicado no discriminadamente, a lo mejor se hubiera podido entrar en el tema. Pero, ¿cómo se va a hacer que se aplaze para personas de setenta y seis años, a personas que el 20 por ciento de ellas fallecen cuando se están tramitando los expedientes?

Nos parece también lo del 8 por ciento de interés como una broma. Págueles usted, al menos, lo de la deuda pública, el 12,5 por ciento, pero no lo de la deuda pública tributaria como usted alegaba.

Creemos, en síntesis, que es lamentable que el Gobierno no haya encontrado otro sitio donde llevar a cabo el ahorro de los gastos corrientes que en éste; que no haya propuesto más que esta medida.

Por eso, fundamentalmente por eso, tenemos que votar en contra de la convalidación de este Real Decreto-ley; pero yo les quie-

ro advertir que se van a crear a regañadientes, señor Ministro de Hacienda, eso que ha dicho aquí, probablemente cargado de sinceridad, abrumados como estamos todos por los problemas de la crisis económica, por el problema del aumento de los gastos corrientes, de que el espíritu que inspiró aquellas leyes sigue vigente y que lo mantenemos unánimemente todos los Grupos Parlamentarios. Le lanzo el reto cuando tengamos que discutir, partida a partida, los Presupuestos Generales del Estado y propongamos aquí ahorros sustanciosos en esos gastos corrientes.

Si usted trae un Decreto-ley, tráigalo con alguna otra medida, aunque sea como aquellas del señor López Rodó a que me refería antes, que no eran quizá más que demagógicas, pero, por favor, que no se rompa siempre la cuerda por el mismo sitio.

Nosotros vamos a votar en contra, y pediríamos a los demás grupos de la Cámara que votaran en contra, que lo hicieran también así porque nos parece que es preciso; en un tema como éste, que las cosas queden perfectamente claras, que el país no piense que hay marchas atrás, que tantas y tantas gentes que están esperando estas pensiones no se vean absolutamente defraudadas.

He oído a algunos grupos manifestarse sobre cuál va a ser su posición. Y otros no lo han hecho. Yo quisiera hacerles una llamada a todos para que voten en contra de este Decreto-ley, para que no lo convaliden y que el Gobierno, con los estudios precisos, con los datos procedentes, remita a la Cámara un proyecto de ley que estudiaremos como solemos hacerlo, con detenimiento, porque estamos también preocupados de este problema de la crisis económica, de ese problema del aumento de los gastos corrientes, ya que entre los 70.000 millones de pesetas y nada, señor Ministro de Hacienda, caben situaciones intermedias. Si hoy se aprueba el Decreto-ley aquí, si hoy se convalida este Decreto-ley del Gobierno, una gran cantidad de españoles pensarán que no ha cambiado nada, que la democracia no ha solucionado realmente ese problema y habremos contribuido de nuevo a abrir heridas y fosos que, afortunadamente, estas leyes habían venido de alguna manera a reparar.

Pido a los Grupos Parlamentarios que, por

una vez, voten en contra de este Decreto-ley y que el Gobierno traiga, con los estudios precisos, un proyecto a la Cámara, si es que lo estima conveniente, y que se estudie si no en los Presupuestos Generales del Estado para que lo veamos adecuadamente.

Entre las intervenciones que se han producido, me quiero referir a la de un Grupo que nos ha entristecido más, y es la de la Minoría Catalana. Comprendo que tienen que apoyar al Gobierno, porque es palabra de caballeros cumplir los pactos, pero quizá hoy, señores de la Minoría Catalana, debían pensárselo un poco, porque esta mañana el Presidente de la Generalidad ha tenido que ir a rendir un homenaje, que saben como yo, que hace referencia a este Decreto-ley que estamos contemplando. A lo mejor hoy se lo debían pensar un poco.

A los otros Grupos de la Cámara que lo vayan a apoyar, o que no lo piensen apoyar —lamento que no esté presente el señor Osorio, que es un gran batallador en la reducción de los gastos corrientes y ha presentado constantemente enmiendas para reducir esos gastos corrientes que el Gobierno no aceptó—, quiero decirles que quizá tengamos ocasión de estudiar en los Presupuestos y de votar juntos sustanciosas reducciones de los gastos corrientes que no sean éstas de quitar pensiones, de rebajar o de retrasar el pago de indemnizaciones de personas en muchos casos muy ancianas y sin otros recursos; en muchos casos porque a esas personas que ha citado el Ministro de Hacienda también se plantean a diario los casos de quien no tiene otros recursos que estas pensiones que esperan que les lleguen un buen día.

Quizá hoy debiéramos pensármolo todos un poco este tema, porque me parece que a las razones de Estado que ha alegado el Gobierno, a las razones de los gastos corrientes, hay que oponer las razones de justicia, hay que oponer las razones de la oportunidad y hay que oponer el que a lo mejor tenemos que empezar nosotros, los Diputados, predicando con el ejemplo.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Centrista, tiene la palabra el señor Bravo de Laguna.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Señor Presidente, Señorías, el Grupo Parlamentario Centrista, y desde luego el Diputado que les habla, es especialmente sensible a la importancia de este tema, porque interviene con otros parlamentarios, de otros Grupos Políticos, en la elaboración de las proposiciones de ley, no en la anterior, por supuesto, que afectan a estas cuestiones.

Con un pequeño intervalo de tiempo se aprobaron aquí las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, sobre Pensiones y otros beneficios a favor de familiares de fallecidos a consecuencia de la guerra civil, y la Ley 35/1980, de 26 de junio, sobre pensiones por mutilaciones a ex combatientes del Ejército Republicano. (*Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente.*)

Como recordarán Sus Señorías, y de modo muy particular el señor Bono, por ejemplo, que ha intervenido antes, el señor Busquets, que hoy no veo en la Cámara, y los otros ponentes, la elaboración de estas leyes fue verdaderamente difícil. Fueron leyes muy laboriosas porque afectaban a un doble orden de valores, a un orden de valores morales, de los sentimientos, de las reparaciones, y a un orden de carácter económico, unas indemnizaciones, una cuantificación de pensiones.

El resultado final fueron estas leyes, aprobadas prácticamente por unanimidad de la Cámara, en las que se trataba de zanjar ambas cuestiones, aludiendo todos los Grupos Parlamentarios que intervinieron a que este era un tema no exclusivamente patrimonio de ningún Grupo político, sino que era un tema de toda la Cámara.

Con aquellas leyes se trataba de superar, de una manera lo más generosa posible, las diferencias que nuestra trágica contienda civil produjo en el trato de unos y de otros, de los que lucharon en un bando u otro o de los familiares respectivos.

Este espíritu de reconciliación fue unánime de la Cámara, y yo quiero hoy recordarlo aquí, porque creo que ese mismo espíritu se mantiene en toda la Cámara y, por supuesto, en el Grupo Parlamentario en el que actúo. Pero también recordarán Sus Señorías, y en particular esos ponentes, que además del tema de la reparación moral, que en definitiva a lo que conducía era a una equipa-

ración en el trato de aquellas viudas, de aquellos mutilados, hubo un tema económico que fue arduamente discutido y con unas cifras que realmente han sido desbordadas por la realidad.

Y es que, señores, en este momento es necesario centrar el tema de la discusión de este Decreto-ley en aspectos puramente económicos. Es, quizá, incluso adelantar algo de los debates que se van a producir como consecuencia de la Ley de Presupuestos. Creo que las cifras económicas son las que en este momento deben ponerse a la consideración de la Cámara, sin perjuicio de otras implicaciones por cuya sensibilidad mi Grupo Parlamentario también está, pero que entiendo que no pueden solucionarse a la vista de las cifras frías que voy a intentar exponer.

Recordarán Sus Señorías que en la discusión de estas leyes se hablaba de cifras muy aproximadas, por ejemplo, del orden de 25.000 viudas y huérfanos, cuando la realidad actual, las previsiones son de 93.726 beneficiarios. Recordarán también que en esa discusión de la Ley 35/1980, sobre pensiones por mutilaciones a ex combatientes del Ejército republicano, se hablaba de unas cifras aproximadas del orden de 25.000 personas, cuando la previsión en este momento se acerca a los 60.000. Esto ha desbordado todas las previsiones presupuestarias que se podían hacer.

En los Presupuestos Generales del Estado para 1981, es decir, los que tiene pendientes esta Cámara de examinar, se han creado unos servicios en las Secciones 07 y 08 de clases pasivas que se titulan, respectivamente, pensiones indemnizatorias de carácter civil y de carácter militar con un valor aproximado a los 50.000 millones de pesetas. Esto es lo que está previsto en los Presupuestos para 1981; este es el esfuerzo económico que toda la sociedad acomete según ese proyecto, que naturalmente está supeditado a la aprobación de la Cámara, para este tema. Por tanto, el enfoque no puede ser una deducción de 70.000 millones de pesetas de una cifra inicialmente prevista, sino que las cifras inicialmente previstas han sido desbordadas en todas sus cuantías.

En este Decreto-ley que hoy se somete a la convalidación de la Cámara, en lugar de figurar esos 50.000 millones, serían 127.200

millones de pesetas los que tendrían que figurar en los Presupuestos para 1981; para 1982, 107.000 millones de pesetas, y para 1983, 87.000 millones de pesetas. El número de las previsiones de beneficiarios ya lo hemos adelantado: por la Ley 5/1979, es decir, la de las viudas, 93.700. Por la Ley de Amnistía, que acoge a los llamados antiguamente Guardias de Asalto y Carabineros, 54.000 Guardias de Asalto y 9.000 Carabineros. Por el Decreto-ley 43/1978, en la parte que todavía sigue vigente, y la Ley 35/1980, de Mutilados de Guerra de la República, hay previstos los siguientes causantes: con pensión o retribución básica y mutilación, 29.400; con una sola mutilación, 18.000, y familiares, 12.600. En total, 60.000 personas. En resumen, de la aplicación de esas tres normas resulta un cálculo de beneficiarios de 218.000 pensionistas.

No se nos diga que el Gobierno y toda la sociedad, cuando asuma, si asume esta Cámara los Presupuestos Generales del Estado, no hace un esfuerzo económico, yo diría que impresionante, en este tema. Porque para 1980 el importe de las clases pasivas, es decir, para el presupuesto actualmente en vigor, estaban previstos 149.000 millones de pesetas, y para el presupuesto de 1981 se han consignado 225.000 millones de pesetas; es decir, 75.000 millones más, de los que unos 50.000 millones se destinan a la aplicación de estas leyes.

Pues bien, en lugar de 225.000, como viene en el proyecto de presupuestos, en el caso de no fraccionar exclusivamente los aspectos económicos, a que antes se ha referido el Ministro de Hacienda, la previsión de clases pasivas tendría que haber sido de 309.000 millones de pesetas, es decir, un incremento de 110 por ciento sobre la partida presupuestaria que está en vigor para 1980.

La urgente necesidad de la aprobación de este Decreto-ley se justifica estrictamente en estos términos económicos. No hay un solo derecho de carácter moral, de carácter reparador de las leyes en cuestión que quede mínimamente afectado por el Decreto-ley cuya convalidación se solicita. Es más, hay algunos aspectos positivos en ese Real Decreto-ley que no se han señalado suficientemente. Por ejemplo, en virtud de la Ley 5/1979 el plazo de presentación de solicitudes

de las viudas y huérfanos hubiera terminado ya el 28 de septiembre; en el Decreto-ley se prevé una ampliación hasta el 1 de julio de 1981, porque se es consciente de las dificultades que en la tramitación de muchos expedientes se han planteado; es decir, se produce una prórroga en el plazo de solicitud de los beneficios.

Estoy de acuerdo con el señor Bono en que no se pueden fraccionar cuarenta años de sufrimiento, ni creo que nadie lo pretenda. Pero coincidirá conmigo el señor Bono en que tampoco ese sufrimiento se podrá pagar con ninguna indemnización económica. (*Rumores.*)

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): Silencio, por favor.

El señor BRAVO DE LAGUNA BERMUDEZ: Resulta doloroso en este tema aplicar medidas de esta naturaleza, pero evidentemente, señor Ramos, esta cuantía económica excede de cualquier medida de carácter de las que ha apuntado, y él mismo ha reconocido que serían de carácter puramente demagógico. Yo creo que sería más bien una burla a esos colectivos el que se acompañara este Decreto-ley de algunas de las medidas que él ha apuntado.

Mi Grupo Parlamentario anuncia que votará a favor de la convalidación del Real Decreto-ley y a favor de que el mismo se tramite como proyecto de ley. Quizá ahí volveremos a discutir muchos de los aspectos del Decreto-ley, algunos en la línea de corrección apuntada por el señor Ramos, quizá otros en la línea de apreciación del tema de las edades o de los intereses. Pero, evidentemente, cualquiera que sea el propósito de nuestro Grupo Parlamentario respecto a flexibilizar al máximo estas medidas, las cifras estrictamente presupuestarias y económicas que hemos planteado de por sí justifican la convalidación hoy de este Decreto-ley.

El señor VICEPRESIDENTE (Fraile Poujade): El señor Ministro de Hacienda tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (García Añoveros): Señor Presidente, señoras y

señores Diputados, el contenido de este Decreto-ley es la expresión de uno de los supuestos en que la política plantea situaciones más incómodas, que es el supuesto de elegir. Evidentemente, ha habido que elegir, y el Gobierno ha elegido un camino. Yo he venido aquí a explicarlo desde el primer momento y a no rehuir en absoluto la discusión sobre un tema que, evidentemente, es delicado, como he dicho antes y como han puesto de manifiesto las intervenciones que se han sucedido a la mía al principio del debate.

Yo quiero hacer a algunos de los señores que han intervenido algunas consideraciones, sin ánimo de polemizar, pero sí de concretar. No puedo admitir que se diga que con este Decreto-ley tiramos por la borda las leyes de concordia. Lamento que alguien lo interprete así, pero no es así.

El aplazamiento de parte de los atrasos no es tirar por la borda las leyes de concordia, es pagar de una manera diferente algo que no se puede pagar, de acuerdo con nuestros criterios, de la forma en que estaba prevista. Y las razones se han expuesto.

Ciertamente se establecen modificaciones en el modo de pago de cuestiones que se aprobaron hace unos meses. Es cierto. Pero también es verdad que no sabíamos o estábamos mal informados todos sobre las consecuencias económicas de lo que estábamos aprobando. Y quiero reiterar algo que he expuesto al principio. Si lo hubiéramos sabido, no es que hubiéramos aprobado leyes diferentes en cuanto al contenido y reconocimiento de los derechos, pero hubiéramos tomado en consideración las formas de pago, que es una cuestión importante cuando se reconocen derechos. Lo hubiéramos tomado en consideración, hubiéramos tomado decisiones, las que fueran, pero decisiones, éstas, parecidas o distintas, no sé, pero decisiones. Porque nadie en esta Cámara es insensible ante argumentos económicos importantes, aunque vengan a incidir sobre situaciones personales tan delicadas como las que están afectadas por estas leyes a las que se refiere el Decreto-ley.

El señor Bono ha leído aquí unas cartas que yo respeto y comparto. Me parece que en algunos casos estas reacciones iniciales se han tenido que deber, en parte por lo menos,

a una no comprensión exacta de lo que decía el Decreto-ley, porque, evidentemente, estos Decretos-leyes son técnicamente complejos y una noticia inicial parece indicar que las cosas son todavía peores de lo que en efecto resultan. Pero yo no entro en ello; cada cual es libre de apreciar y comprendo que los afectados lo aprecien de ese modo.

La solidaridad. Claro que hace falta solidaridad. En virtud de un principio de solidaridad es por lo que se trae este Decreto-ley. En virtud de un principio de solidaridad, porque hay que elegir. Yo no quiero nunca, huyo siempre de traer aquí frases o comentarios que puedan parecer, en algún sentido, sentimentales o demagógicos, pero evidentemente una política económica planteada con mayor o menor acierto —según nuestra opinión con acierto, según la opinión de algunas de Sus Señorías seguramente con desacierto— para afrontar un problema como el de desempleo, lo que coloca en la balanza es el mismo desempleo u otro tipo de gastos corrientes. No quiero plantear aquí dialécticas sencillas, cómodas ni demagógicas; no quiero hacer ningún tipo de demagogia, pero quiero recordar con todo respeto a todos ustedes que aquí se trata de una política económica para forzar las inversiones, para crear puestos de trabajo; esto es así. Esto no es ningún invento para contrarrestar unos aspectos, que yo no llamaría sentimentales, sino profundamente humanos, con otros aspectos también profundamente humanos; pero es así y tenemos que considerarlo. Por eso hay que elegir en determinadas circunstancias. Cuando no se afecta a los derechos de las personas, cuando simplemente se aplaza parte del pago de lo atrasado, sencillamente esto, aunque sea mucho en algunos casos, desde el punto de vista psicológico, creo que estamos eligiendo, no el ideal para todos, pero sí un camino razonable, desde luego, desde nuestro punto de vista.

No me gustaría, por tanto, que se vinculara a este Decreto-ley cualquier criterio que implicara que habíamos roto lo que era la concordia en relación con una guerra civil, en la que la inmensa mayoría de los que estamos aquí no participamos, pero que a todos nos afecta como españoles herederos de quienes participaron.

No es cierto que este Decreto-ley venga sin otras medidas. El Decreto-ley en sí, sí viene sin otras medidas, se refiere a este tema, pero se ha aprobado el mismo día que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. El mismo día. Y en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado hay otras medidas de contención de gastos corrientes. Se podrá discutir si son las adecuadas o no —yo, sobre todo, admito la discusión—, pero no son las únicas, porque las medidas sobre contención de los gastos militares, de reducción de los gastos militares, de crecimiento de los gastos militares, están en el proyecto de Presupuestos, aprobado en el mismo día. Porque las normas sobre incompatibilidades están en el proyecto de Presupuestos, aprobado en ese mismo día. Hay una serie de medidas en la Ley de Presupuestos, y esto forma parte —y lo he dicho al principio— de ese contexto. Naturalmente, no estamos debatiendo ahora los Presupuestos; comprendo que pueda parecer que no hay otras medidas; pero es cierto que las hay. Es cierto que en el proyecto de Presupuestos —aunque no quiero aquí anticipar debates— los gastos corrientes que no son de personal han crecido menos del 8 por ciento. Este año crecen el 6 por ciento respecto del año anterior. Esto es cierto. Hay restricciones importantes en el crecimiento de algunas transferencias para gastos corrientes. Esto es cierto y se puede ver en el Presupuesto. Por tanto, no son medidas aisladas. No es lo único que se nos ha ocurrido. Se nos han ocurrido bastantes cosas y ahí están. Esta es una de las cosas que se nos han ocurrido.

Tampoco se diga —por lo menos yo no comparto esa opinión— que la cuerda se rompe siempre por el sitio más débil. No es así, porque, además, yo no he venido aquí a decir que había abusos. Yo no he dicho que había abusos; que había una interpretación abusiva o que había abusos en las leyes. No he dicho eso, ni siquiera he dicho que las cifras, que la cuantía de las pensiones son como para que parezca que hay gente que va a nadar en la abundancia. Alguno aisladamente sí nadará en una relativa abundancia; pero la inmensa mayoría no. No nos engañemos, la inmensa mayoría son pensiones no de siete mil y pico; de nueve mil y pico este año; de diez

mil y pico el año que viene; son pensiones muy pequeñas; esto está claro y esas personas no van a nadar en la abundancia. Pero yo no quiero generar aquí la idea tampoco de que algunos van a cobrar mucho. Hay algunos que van a cobrar mucho, y estará bien que lo cobren, puesto que así lo hemos acordado en esta Cámara. Hay otros que van a cobrar poco y, en consecuencia, a todos va a afectar; pero no tenemos información sobre quiénes están con pensión única de este tipo. No la tenemos. Y como no la tenemos, no podemos tomar medidas en este momento; las tomaremos en cuanto la tengamos. Si la tenemos dentro de dos meses, dentro de dos meses; si es dentro de cuatro, será dentro de cuatro. Eso no quiere decir que el Decreto-ley haya sido precipitado, porque el Presupuesto tiene que estar aprobado para el 31 de diciembre y las rectificaciones deberán venir antes, no después. Habría que aprobar el Decreto-ley si se van a adoptar este tipo de medidas de ahorro y, por tanto, en ese sentido no ha sido precipitado.

En cuanto a las dificultades para la documentación, solamente quiero recordar que desde el mes que se pasaron al Ministerio de Hacienda este tipo de pensiones para la solución de estos expedientes, hubo que hacer lo siguiente: 200.000 pensionistas previstos ahora —entonces se preveían algunos menos— respecto de un colectivo de pensiones del estado de 450.000 que hay ahora, suponían una revolución en la Subdirección de Clases Pasivas de la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda. Hubo que crear una oficina y emplear a trescientos funcionarios, contratar a trescientas personas para afrontar la resolución de estos expedientes, y así se ha hecho, y se están resolviendo con diligencia y a un ritmo que oscila entre tres mil y cuatro mil expedientes mensuales de la Ley 5/79, y esperamos que asciendan, cuando se resuelva el problema de presentación de la documentación en el año 1981, a un ritmo de cinco mil mensuales; no se ha parado y se ha puesto la mayor diligencia y no sólo no se han dado nunca instrucciones de que haya la más mínima discriminación, sino que se han dado instrucciones repetidas veces por este Ministro de Hacienda a sus subordinados, como funcionarios, de que no ejerzan ni

por asomo, ni directa ni indirectamente, ningún tipo de discriminación, y yo lo que ruego es que si hay alguna que pueda tener una fundamentación política se denuncie; se me denuncie a mí o a quien corresponda, que yo tomaré las medidas oportunas, porque esto nunca ha sido así, no debe ser así, y si alguna vez ocurre, estoy dispuesto a corregirlo de la manera más eficaz y rápida posible.

No hay, y si las hay no las quiero aludir, pensiones fabulosas. Yo entiendo que si la viuda de un general del ejército del General Franco tiene derecho a percibir el año que viene 176.000 pesetas de pensión, la viuda de un General del Ejército Republicano tiene derecho a percibir lo mismo. Otra cuestión es si esto es mucho o es poco; eso está en la ley y ahora no discutimos ese tema. Las pensiones serán buenas o serán malas, pero son las que hay. En este punto yo no he intervenido y repito, no he querido hacer ningún tipo de demagogia en sentido contrario diciendo que porque hay pensiones de 176.000 pesetas, esto está muy bien. Esto está bien por las razones que he explicado descarnadamente y nada más que por estas razones, que serán o no suficientes, pero no hay otras.

Y, por último, este Decreto-ley se ha presentado sólo en cuanto tal Decreto-ley; pero repito que va acompañado de la Ley de Presupuestos, desde luego respecto a cierta medida, que yo creo que con un poco de sentido del humor el señor Ramos me sugería. Bueno... yo no pretendo engañar a nadie y, por tanto, ahorrar por cuestiones de pura apariencia para decir que se está ahorrando, me parece poco serio. Otra cosa es que aunque sea por poco dinero, haya que ahorrar en ciertas cosas. Si hay que hacer un ahorro, aunque sea de una peseta, hágase; pero aparentar que se ahorra por cuestiones que valen tres pesetas para que simplemente se aparente, a lo mejor es que soy muy mal político, pero, desde luego, eso no me va, y no estoy dispuesto, no diré a tomar esa medida u otra, sino a tener el criterio de tomar medidas aparentes para dar la sensación de que se hace algo importante. Las cosas hay que hacerlas a fondo, y si no se hacen de fondo, es mejor no aparentarlas, y nada más. Yo... (*Protestas y pateos desde los escaños de la izquierda.*) No había terminado todavía.

(Ocupa la Presidencia el señor Presidente.)

Este Decreto-ley pretende las finalidades económicas que en él se indican, queda a disposición de la Cámara como proyecto de ley; el proyecto de ley a que aludía el señor Ramos ahí está si este Decreto-ley es ratificado. Los criterios han sido limpiamente explicados; yo no he hurtado ni una sola cuestión de las que plantea el Decreto-ley, y estoy dispuesto a volver a explicarlo cuantas veces sea necesario y discutirlo como proyecto de ley, todas las veces que haga falta.

La cuestión es difícil e incómoda. Es incómoda para el Gobierno, es incómoda para mí personalmente y es incómoda seguramente para todos ustedes, pero es de los momentos en que hay que elegir y nosotros hemos elegido de este modo. Muchas gracias. (Nuevas protestas y pateos desde los escaños de la izquierda.)

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de este Real Decreto-ley. Se somete a decisión de la Cámara, conforme al artículo 86 de la Constitución, la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/1980, de 26 de septiembre, sobre fraccionamiento en el pago de atrasos de pensiones derivadas de la Guerra Civil.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 165; en contra, 134.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley 8/1980, de 26 de septiembre, sobre fraccionamiento en el pago de atrasos de pensiones derivadas de la Guerra Civil.

Se ha solicitado que se someta a decisión del Pleno de la Cámara la tramitación de este Real Decreto-ley como proyecto de ley. Ese punto va a ser objeto de la siguiente votación.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 297; en contra, uno; abstenciones, una.

El señor PRESIDENTE: Queda acordada la tramitación como proyecto de ley, por el pro-

cedimiento de urgencia, del Real Decreto-ley 8/1980, de 26 de septiembre, convalidado con anterioridad

— 9/1980, DE 26 DE SEPTIEMBRE, SOBRE FINANCIACION DE LOS AYUNTAMIENTOS Y TASA DEL JUEGO.

El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 9/1980, de 26 de septiembre, sobre financiación de los Ayuntamientos y tasa del juego.

¿Grupos Parlamentarios que deseen intervenir en el debate? (Pausa.)

Tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Comunista, el señor Tamames para consumir un turno en contra.

El señor TAMAMES GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Real Decreto-ley 9/1980, de 26 de septiembre, sobre financiación de los Ayuntamientos y tasa del juego, que vamos a debatir en la última parte de la sesión de esta tarde, es una disposición legislativa que tiene numerosas implicaciones, y en su propio preámbulo establece toda una serie de ilustraciones que yo creo que no solamente son interesantes para el Parlamento, sino también para la opinión pública.

Este preámbulo, que es, quizá, particularmente largo y explicativo, en contra de lo que sucede en otros casos, nos informa sobre un fenómeno poco estudiado en esta Cámara y que merecería la atención de los señores Diputados, porque va creando circunstancias nuevas en la sociedad española. Nos informa, sencillamente, sobre la amplia difusión del juego en nuestro país, sobre su rápido crecimiento, como se dice en el propio preámbulo «con mayor rapidez que el producto interior bruto y que el índice de precios de consumo». Esta enorme difusión del juego se manifiesta con especial virulencia, afectando a todos los estratos de nuestra sociedad, en el juego llamado bingo.

Para los señores Diputados que no hayan tenido ocasión de leer el preámbulo, recordaré que la cifra de cartones de bingo que se venden mensualmente a los establecimientos de este tipo en nuestro país es de 160 millones, es decir, casi cinco cartones por ha-

bitante y mes. Es una de las industrias más florecientes del país, de las pocas florecientes; la fabricación de cartones de bingo por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que los vende a los establecimientos, cobrando en el momento de la venta, precisamente, la participación de la Administración en los beneficios del juego, actualmente un 15 por ciento del costo al público y, en el futuro, si se convalida este Decreto-ley, un 20 por ciento.

No vamos aquí a entrar en disquisiciones en este momento —pero habrá que entrar en el futuro— sobre el sentido que tiene la difusión del juego, en los límites que ha llegado a tener en España y con los ritmos de crecimiento que presenta. Pero sí convendrá recordar que esa difusión del juego no es el resultado del juego de las fuerzas democráticas —valga la redundancia—, sino que es el resultado de un decreto tardío del período anterior a las elecciones de junio de 1977, el Real-Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, que despenalizó el juego en España. No vamos a criticar esta disposición, pero sí vamos a recordar que no es una disposición de la democracia y sí que la democracia tiene la obligación de preocuparse de una cuestión como ésta, que no es baladí.

Si ustedes repasan el Presupuesto para 1981, podrán comprobar que hay tres partidas muy significativas: de las combinaciones aleatorias y juego, el Estado va a percibir 69.000 millones de pesetas; por lotería, 68.250 millones, y por quinielas, a través del Patronato de Apuestas Mutuas, organismo autónomo, 48.000 millones de pesetas de ingresos netos por la venta de los boletos. En total, las Administraciones públicas, en 1981, de cumplirse las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado, recaudarán 185.000 millones por juego.

Pero estas cifras son solamente un indicio de lo que realmente está costando al país esta actividad que se ha desbordado desde 1977. Si calculamos esos 160 millones de cartones y los elevamos, por así decirlo, a cantidad anual, resultan casi 2.000 millones de cartones a una media, que nos parece muy conservadora, de 200 pesetas por cartón, lo que representa que los españoles se juegan al bingo todos los años del orden de 400.000 millones de pesetas.

En cifra de casinos —menos fácil de averiguar—, unos 200.000 millones; en lotería, calculando con la cantidad que aparece como indicio en el Presupuesto, 225.000 millones, y en quinielas, la cifra neta que da el Presupuesto, 48.000 millones. En resumen, los españoles se jugarán previsiblemente en 1981 875.000 millones de pesetas en juego legal y autorizado, porque además de eso están nuestras calles, nuestras plazas, las timbas, los garitos de todo tipo, que están proliferando igualmente.

Esa cifra de 875.000 millones de pesetas de juego representa una cifra ya macroeconómica de casi un 5 por ciento del producto interior bruto. Por eso hay que prestar más atención de lo que parecería necesario a un Decreto-ley como éste. Son cifras para meditar; lo que representa el haber abierto una caja, que yo no voy a llamar de Pandora, pero que se empieza a parecer mucho; el haber abierto y despenalizado el juego sin control, sin una participación del sector público, sin una selectividad; el impacto que el juego, y especialmente el bingo a que se refiere este Real Decreto-ley, tiene en nuestra cultura. Dicen en las grandes ciudades que el bingo está arruinando el teatro, está arruinando la lectura y a una buena parte de la hostelería, está creando una sensación de degradación de la sociedad, de angustia, y es un reflejo de la crisis que acelera, al mismo tiempo, las propias frustraciones de la crisis.

Nosotros, el Grupo Parlamentario Comunista, creemos que hay que ser bastante consecuente y que, por tanto, hay que empezar a estudiar en la Comisión Nacional de Juego cuál es el futuro de esta actividad, y no pretender extraer, a base de una actividad como ésta, ingresos sobre el sector público que se volverán, en definitiva, contra la sociedad y contra el propio Estado.

En ese sentido, la Conferencia de Ayuntamientos celebrada en Bilbao, en abril de 1980, puso de relieve, en su tercera resolución, la necesidad de que en la Comisión Nacional de Juego hubiese una mayor presencia de los Ayuntamientos, y que quedara en manos de los Ayuntamientos la última posibilidad de aceptar o rechazar el establecimiento de casas de juego, porque ya es una situación de imposible control. Aquí abre un bingo quien

quiere, cuando quiere y donde quiere. En Madrid hay más de 150 legalmente establecidos por decisión de la Comisión Nacional de Juego y del Gobierno Civil, sin consultar para nada a las autoridades municipales como tales.

Este Real Decreto-ley, que nos trae hoy el Gobierno, tendría que haberse pensado también en estos aspectos a los que me refiero. Porque no podemos ser ajenos a esa degradación de la sociedad, a la aparición de mafias locales e, incluso, mafias internacionales en España en torno a un negocio cada vez más oscuro. Y en vez de plantearse una política de juego, en vez de plantearse un mayor control, un sentido más riguroso y estricto en la selectividad del mismo, se nos trae simplemente un Decreto-ley diciendo que se aumenta del 15 al 20 por ciento la tributación, y que a los casinos se les rebaja, en cierto modo, esa presión fiscal, sin explicar tampoco por qué se da preferencia a los casinos —se dice que por una razón de costo—, pero parece como si hubiera una política fluctuante del Gobierno en este sentido, que no se acaba de explicar y que yo espero se explique.

Lo cierto es que, además, hay un elemento en el propio aumento del impuesto que nos parece casi grotesco. Cuando se dice que es de esperar un aumento de más del 25 por ciento de los ingresos de juego por el sector público en 1980, y que ese 25 por ciento se considera todavía afectado a las finalidades teóricamente de beneficencia y de gastos de los Ayuntamientos, pero que por encima del 25 por ciento se va a utilizar para las inversiones públicas, esto nos parece ya una auténtica farsa. Que se tenga que decir que una parte de lo que se recauda del juego se va a dedicar a inversiones públicas es verdaderamente irrisorio; es un poco hacer así como un mandato bfblico a la inversa: que no se entere tu mano derecha de lo que hace tu mano izquierda.

Parece como si, por un lado, se estuviese degradando la sociedad, creando hábitos contrarios a una disciplina social democrática, y, por otro, se dice que con esto se fomentan las inversiones públicas.

Esto, señor Presidente, señoras y señores

Diputados, por lo que se refiere a la primera parte del Decreto-ley sobre el juego.

Además, nos parece que es bastante poco correcto y bastante poco elegante el haber mezclado en el título del propio Decreto-ley el juego con la financiación de los Ayuntamientos, como si los Ayuntamientos vivieran de esto, cuando en realidad tienen una participación de un 25 por ciento, y no se ha tenido en cuenta ninguno de los planteamientos de los Ayuntamientos sobre la dignificación de la Comisión Nacional del Juego.

Nos parece además que el resto del Decreto-ley tampoco está a la altura de las necesidades de nuestro tiempo. Por ejemplo, se dice que hay toda una serie de previsiones sobre imposición indirecta, sobre imposición directa, pero no hay ninguna clase de planificación a largo plazo.

Vienen luego, en esas conversaciones esporádicas entre la Administración central y la Administración local, los dimes y diretes, los «quid pro quo», pero en realidad también en el Congreso de Ayuntamientos de Bilbao, en la primavera pasada, se planteaba la necesidad de establecer una comisión paritaria de transferencias entre Gobierno y Ayuntamientos, punto 7.º de la misma, todavía sin cumplir a pesar de las reiteradas manifestaciones de los Ayuntamientos.

Los Ayuntamientos españoles lo que quieren es que haya ya una comisión de transferencias, para que todos esos asuntos se discutan con tiempo, con tranquilidad, con datos en la mano, y no con prisas y con decisiones todavía inadecuadas en relación con las demandas presentadas por los propios Ayuntamientos. Esto viene a cuento de que en el Real Decreto-ley se establece que a partir del 1 de enero de 1981 la participación de los Ayuntamientos en la imposición indirecta aumentará en un punto y medio, se dice, para pasar del 8,5 por ciento de participación al 11,5 de participación. Esto significa un incremento de 15.000 millones de pesetas, pero lo que los Ayuntamientos estaban planteando después de sus conferencias de Bilbao y de Málaga era pasar al 12,5 por ciento en 1981 y al 15 por ciento en 1982, respecto de los impuestos indirectos.

Por otra parte, en el Decreto-ley se dice que por primera vez —y así es, porque lo han

pedido los Ayuntamientos— se tendrá por parte de éstos una participación del 1 por ciento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, quiero decir en la recaudación global que hace la Administración central de este Impuesto. Esta cifra es sencillamente irrisoria. En la Conferencia Municipal de Málaga, y después ante el Ministro de Hacienda, se planteó la necesidad de una participación inicial significativa del 5 por ciento en 1981, para ir elevándola gradualmente hasta llegar al 15 por ciento en 1985, en línea con lo que sería una planificación, incluyendo transferencias de la Administración central a la Administración local.

Pero, en síntesis, ¿qué resulta de este Decreto-ley? Que frente a unas peticiones de los Ayuntamientos de participación en la imposición directa e indirecta para 1981 de 100.600 millones de pesetas estimados, por este Decreto-ley se queda en 25.000 millones de pesetas, lo cual significa que se siguen garantizando, dentro de esa política económica del Gobierno, toda una serie de situaciones difíciles, porque cada vez hay más demanda social, cada vez el vecindario se refiere más a los Ayuntamientos y exige más a los municipios, a los que ve más cerca que la Administración central.

La crisis económica se aprecia cada vez más en los Ayuntamientos, sin que éstos puedan participar en una política económica, que es entera responsabilidad del Gobierno. Porque los Ayuntamientos han pedido elaborar un programa de inversiones públicas municipales, con participación, en cooperación con el Estado, con la Administración central, sin que esto haya sido posible hasta ahora, precisamente por la falta de esa comisión de transferencias que es muy importante para regular todo el proceso de potenciación de la Administración local, y para hacer verdaderos los artículos 140 de la Constitución sobre la autonomía municipal, y 142 sobre autonomía y autosuficiencia financiera.

Por lo demás, el Decreto-ley es absolutamente incompleto. Nada se dice sobre financiación del déficit de los transportes públicos, déficit que viene siendo el principal causante de la situación de números rojos de las municipalidades españolas más grandes. Y ello porque por una serie de razones de precios

políticos, las tarifas no cubren nada más que entre el 40 y el 70 por ciento del costo.

En conversaciones con el Gobierno el pasado verano, se llegó a un principio de acuerdo, según el cual las tarifas deberían cubrir un 75 por ciento y repartir el 25 por ciento restante entre la Administración Central y la Administración Local. Pero después de esto no ha quedado absolutamente nada cierto hasta el momento y nos encontramos con que el gran problema del déficit municipal, que son los transportes públicos, queda todavía a resultas de largas negociaciones que podrían haber sido ya emprendidas, y que podrían haber sido traídas a estas Cortes para poder resolverlo, y establecer un horizonte de acabar con el déficit permanente de las municipalidades, que son el resultado de una política centralista de muchos años y de unas decisiones que todavía están sometidas a la tutela de la Administración Central. Porque gran parte de estos males y de estos problemas radican en el retraso del envío a estas Cortes de un proyecto de Ley de Régimen Local, y este proyecto de Ley de Régimen Local tendría que estar aquí, finalmente, antes del 1 de noviembre. Pensamos que antes del 1 de noviembre nos podemos encontrar con una nueva lluvia de Decretos-leyes referentes a la Administración Central que van a enturbiar todavía más, en una extraña política gota a gota, lo que es una situación ya difícil.

Por ello, por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Comunista va a votar en contra de la convalidación de este Decreto-ley e invita a los demás Grupos a que asuman esta misma postura que es, sencillamente, la única respuesta que se puede dar a lo que es un Decreto-ley improvisado, que no tiene en cuenta las verdaderas necesidades y que no tiene en cuenta tampoco lo que debe ser un principio importante de nuestra fiscalidad, que son los aspectos, las implicaciones de una moral pública y de un desarrollo de la cultura y la convivencia entre los ciudadanos y que, desde luego, en este Real Decreto-ley brilla totalmente por su ausencia. Nada más, señor Presidente y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Centrista tiene la palabra el señor Rodríguez-Miranda.

El señor RODRIGUEZ-MIRANDA GOMEZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, quisiera decir que la intervención que me ha precedido ha situado a la intervención que en defensa del dictamen pensaba efectuar, en representación del Grupo Parlamentario Centrista, en una muy difícil situación, porque no se ha atacado el Real Decreto-ley 9/1980, sino que se ha hecho un ataque al bingo, se ha hecho un ataque al juego, y parece como si la posición consiguiente fuera una defensa del sistema de juego.

Hemos recibido, junto a un aluvión de cifras relativas a cuál es la participación del Estado en los juegos de azar, en la lotería, en las quinielas, unas lecciones moralizantes acerca del juego, y yo quisiera garantizar a quien me ha precedido en el uso de la palabra que, en cualquier caso, la defensa del juego no la va a asumir este Diputado que, en modo alguno, participa del vicio o de la calidad de ocupar sus ratos de ocio con el juego.

No voy a hacer una moral del juego ni voy a defender una moral del juego, señor Tamames, porque realmente su alternativa era: o juego sí, o juego no. Lo que tampoco voy a defender es el sistema restrictivo o, quizá con más precisión, el sistema prohibitivo de la legislación anterior a la etapa democrática que originamos el 15 de junio de 1977 los Grupos políticos que hoy nos sentamos en esta Cámara.

Entiendo que en una sociedad que se dice libre hay actividades que deben quedar permitidas, hay actividades que deben quedar sometidas a un cierto grado de control y del Estado, como es el caso concreto del juego, pero que en ningún caso debe producirse respecto de ellas una situación de prohibición, como parece ser que se venía a defender en la intervención precedente, y he aclarado precisamente que la posición de quien hoy en día le toca defender este Real Decreto-ley es paradigmática, porque en ningún caso es ni un jugador personal ni un defensor del juego como actividad a través de la cual ocupar lo que puede ser una parcela de ocio de la actividad humana.

Lo que sí me interesa destacar es que ha habido inexactitudes en la intervención precedente que han hecho referencia a una actividad descontrolada del juego por parte de

la Administración Pública. (El señor Presidente se ausenta de la sala y ocupa la Presidencia el Vicepresidente, señor Gómez Llorente.)

Se ha dicho concretamente que hay un juego sin control, que hay un juego sin participación pública, y en aras de la verdad, y quizá recordando lo que es el «Boletín Oficial del Estado», creo que existe un sistema concreto de intervención administrativa en el régimen de concesiones y autorizaciones, que la calidad de operador, que la calidad de fabricante no se dan en un mercado enteramente libre, sino que hay un claro control de la Administración Pública, y entiendo que un control justo, parecido al de los sistemas democráticos de la Europa que es nuestro contorno, en el cual la facultad de tutela de ese bien general de la sociedad la asume la Administración Pública poniendo determinadas cortapisas a la actividad del juego.

Aún más; quisiera decir que tampoco es exacta la afirmación de que las empresas públicas no participan en el juego. Creo que sí participan en el juego, tanto directa como indirectamente. Participa la Administración Pública en todo el complicado sistema de licencias, desde que se solicita cualquiera de las actividades de juego de azar hasta la simple fabricación de los cartones, que no se entrega al mercado privado, sino que se hace precisamente a través de la actividad de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, y participa también, señor Tamames, a través de empresas calificadas, como puede ser ENTURSA, a través de empresas públicas en la dimensión concreta del juego, y quiero recalcarlo concretamente, porque quizá en algunas dimensiones, como puede ser la fabricación de las máquinas llamadas tragaperras, es un monopolio concreto del Estado atribuido a una concreta empresa incardinada en el INI, cuyo ciento por ciento de capital es público. Luego, no es exacta la afirmación de que la actividad del juego es un descontrol, es una especie de lujuria que se ha tirado sobre los españoles por un Gobierno que no lo controla. Es una actividad que en todo punto la Administración Pública ha llegado a controlar, y quizá coincida con usted en el carácter excesivamente voluminoso de las cifras que los españoles juegan día a día en

cualquiera de las actividades de juego; pero, en todo caso, ésa es una actividad libre de los ciudadanos, señor Tamames, y creo que ni su postura —desde luego, no en la mía— debemos intentar cortapisar.

Digo esto porque, realmente, la gran intervención que me ha precedido ha sido eso, una lección moralizante sobre el juego, sobre su necesidad o su no necesidad, yo creo que sobre su prohibición, y ha sido una lección creo que equivocada sobre lo que es la actuación de la Administración Pública en el control del interés público en lo que se refiere a cualquiera de las actividades de juego, y me ha parecido forzado hacerlo porque mayoritariamente las actividades de juego están controladas por la Administración Pública.

El Decreto-ley hace referencia a algunas de ellas, como es el bingo. Aquellas a las que no hace referencia el Decreto-ley, pero que también han sido aludidas en la intervención de ataque al Decreto-ley que hoy defiendo; como la lotería, es éste un monopolio del Estado, un monopolio con mucha tradición en la Hacienda española. Lo ha sido desde el tiempo de Fernando VII, y jamás se ha roto, cualquiera que haya sido el sistema político imperante en España, ese sistema de utilización. Las quinielas, desde su creación, después de la guerra civil, son otro monopolio del Estado, con una adscripción concreta de los resultados económicos de las mismas para actividades, tanto de programación de las Administraciones Locales, dotándolas de medios económicos, como para actividades de carácter benéfico.

Dicho esto, yo quisiera decir que todo el resto de las lamentaciones, del largo coro de lamentaciones que hemos escuchado de que el Decreto-ley no soluciona problemas de los Ayuntamientos, nada tiene que ver con el concreto proyecto que hoy está sometido a debate en esta Cámara, porque en ningún modo este Real Decreto-ley es ni una ley de las Haciendas Locales ni una ley de Régimen Local que venga a resolver todos sus problemas. Pero sí es una medida importante en la línea de la declaración programática del Gobierno que fue sometida a esta Cámara a través del voto de confianza y que implica, por parte del Estado, una generosa cesión de los productos económicos de su actividad, de su

patrimonio, incrementando notablemente lo que eran previsiones de ejercicios pasados.

Hay un dato que es importante destacar: la participación de los Ayuntamientos en lo que es Presupuesto General del Estado ha venido teniendo un carácter claramente preferencial en la actuación del Gobierno en cuanto a la cesión de cantidades, y yo quiero recordar a esta Cámara que la participación de los Ayuntamientos en los impuestos indirectos del Estado sufre una evolución clara que demuestra una voluntad de la Cámara y una voluntad del Gobierno de ir incrementando notablemente esta participación.

El régimen inicial en 1975 partía de una participación del 2 por ciento, que entonces se eleva al 4 por ciento. En 1976 pasa al 5 por ciento. En 1979 se incrementa a la cifra del 7 por ciento, y en los Presupuestos Generales del Estado la previsión era del 8,5 por ciento.

Pues bien, señor Tamames, para incrementar la participación por encima de las previsiones, para poder dotar a los Ayuntamientos de mayores dotaciones financieras por encima de las propias previsiones que establecía la Ley General de Presupuestos, que está remitida a esta Cámara y que tendrá lugar su discusión próximamente, era necesario el Decreto-ley que hoy en día contemplamos, para elevar esa cifra del 8,5 por ciento al 10.

Y es más, el Gobierno inicia también, a través de este Decreto-ley, una voluntad de participación de los Ayuntamientos en otra fuente tan importante como es la de los tributos directos, y creo que aquí la cuantificación tiene un sentido no tan importante como la cuantificación. Es importante el cambio de sentido de que la participación deja de producirse no sólo en el campo de la imposición indirecta, sino que se traduce también en el campo de la imposición directa y que en el primero y más importante de los impuestos que articulan el sistema fiscal español, en el impuesto sobre la renta, con este proyecto de Real Decreto-ley se abre concretamente una vía a esa participación en el claro carácter evolutivo que el Gobierno ha venido manifestando en los últimos años y en el claro carácter de confirmación de lo que fueron declaraciones del Gobierno que obtuvieron el apoyo del Congreso, porque aquí, en esta Cámara concretamente, se dijo que se entendía positivo por

el Gobierno continuar, dentro del marco de las disponibilidades financieras del país, el proceso de saneamiento y mejora de las Haciendas locales incrementando su participación en el conjunto de recursos del erario público.

Y en este mismo sentido entra no sólo el incremento notable cuantitativo y cualitativo de la participación de los Ayuntamientos en la Hacienda estatal, sino también el incremento de los recursos que se obtienen por los Ayuntamientos de determinados tributos de los que son titulares o cesionarios de su resultado recaudatorio y también de los incrementos en determinado campo de la imposición indirecta.

Y puesto que se ha hecho una apelación al sentido del juego, yo no comprendo cómo en un sistema en donde se pretende hacer progresar los impuestos indirectos, por qué esta Cámara debe rechazar un proyecto de Decreto-ley en donde lo que se grava no son concretas actividades mercantiles que pueden suponer, por el efecto que toda imposición implica en el normal desenvolvimiento económico, efectos de carácter negativo o de carácter restrictivo cuando el Gobierno claramente dimensiona estos efectos y los invierte, precisamente en un campo de la actividad como es el juego que, evidentemente, denota características de innecesidad y de lujo.

Quien realiza una actividad que no es considerada como socialmente beneficiosa, que no tiene una actividad desde el punto de vista económico de necesaria, quien dilapida su dinero en el juego, en mayor o menos medida, no entendemos, señor Tamames, por qué el Grupo Parlamentario Comunista manifiesta su disconformidad con que ésta sea una de las fuentes, precisamente a través de las cuales se nutre el mayor incremento de recursos del erario público.

Si vamos a hacer pesar los tributos directos en relación a los tributos indirectos en unos determinados porcentajes, y si vamos a intentar incrementar el peso de los impuestos indirectos, yo creo que es una razón de justicia indiscutible y que no existirá Grupo político en la Cámara —y de ahí mi sorpresa por las palabras que me han precedido— que no piense que dentro del campo de los im-

puestos indirectos actividades socialmente innecesarias, como son las del juego, queden gravadas en una mayor medida en beneficio de la menor tributación en consecuencia de actividades socialmente necesarias o beneficiosas. Era importante, creo, recalcar este extremo; era importante decir por ello que la actividad del Gobierno en cuanto al mayor volumen de ingresos se pretende extraer de actividades a través de las cuales se efectúa ya una calificación moral. Creo que no hay equivocación alguna y que es difícilmente discutible el que la actividad del juego sea una de aquellas que deban contribuir en una mayor medida, porque es indicio de algo que en este momento la Cámara ha reafirmado permanentemente en lo que ha sido la Reforma Fiscal de una expresión de una capacidad contributiva mayor; no sólo eso, creo que es indicio de una expresión en determinados casos de una dilapidación innecesaria de caudales privados.

Junto a ello, el Gobierno articula determinadas medidas en el Decreto-ley en la misma vía de proyecto de saneamiento de las Haciendas locales. Estas medidas se atienen a la necesidad de amparar en la Constitución cualquier elevación de tipos de los impuestos cedidos a los ayuntamientos en la vigente legislación de Presupuestos.

Como esta Cámara sabe, por virtud de lo dispuesto en nuestra Constitución, en su artículo 134, cualquier alteración de los términos económicos del proceso de la imposición para que pueda ser efectuada en una ley formal de Presupuestos, requiere una habilitación previa en una ley material que así lo autorice. Y éste ha sido el criterio por el que en todas las leyes materiales de carácter fiscal aprobadas por esta Cámara, en el Impuesto sobre la Renta, en el Impuesto sobre Sociedades, en el Impuesto de Transmisiones, en el Impuesto sobre el Tráfico de Empresas, en los Impuestos Especiales, en el Impuesto sobre el Lujo, se ha incluido específicamente esa previsión, pero esa previsión no existía en los impuestos cedidos a los ayuntamientos precisamente por el propio Impuesto sobre la Renta, y era necesario suplir ese vacío legal mediante una simple autorización para que, a través del ejercicio de la Ley de Presupuestos, se adecuen ingresos y gastos de acuerdo con

lo que es la previsión fiscal que efectúa el Gobierno.

Entiendo que las razones del Decreto-ley 9 son claras en cuanto a su justificación y son claras en cuanto a su urgencia, porque implican la necesidad de habilitar el cauce material para que la ley formal de Presupuestos pueda producir el determinado resultado que a través de ella se pretende, y es la adecuación de ingresos y gastos. Y entiendo que está claro también el proyecto en el sentido de manifestar una voluntad de mayor participación municipal, de mayor dotación a las Haciendas locales con cargo a lo que es el Presupuesto estatal y con cargo a lo que son sus propios recursos fiscales.

Se me va a decir que los recursos, en todo caso, son insuficientes para las necesidades que tienen los ayuntamientos. Estoy de acuerdo. En política, la principal actividad es la de atribuir unos recursos escasos de acuerdo con unas valoraciones que en todo momento deben ser efectuadas por criterios no económicos, sino por criterios morales; pero lo que no se puede negar es la voluntad innegable de la ley de dar un paso importante adelante atribuyendo numerosos recursos financieros a través de los que articula el Real Decreto-ley, cuyo voto favorable estoy solicitando en estos momentos. Y lo que tampoco se podrá negar —y entiendo que es importante recalcarlo— es que a través de ello se manifiesta una progresión constante en el ejercicio de la acción del Gobierno de dotar, en la medida de las necesidades presupuestarias del propio Estado, de una mayor participación, de un mayor saneamiento a la actuación de las Corporaciones locales.

Hay un punto más que quisiera expresar a esta Cámara en relación al Decreto-ley que estamos en este momento contemplando. Hace referencia a la constitucionalidad del mismo por implicar materias que, en cierto sentido, pudieran quedar incluidas en el título primero de nuestra Constitución.

En efecto, de acuerdo con la legislación española, de acuerdo con nuestra vigente Constitución, el juego de los artículos 86 y 31 de la Constitución podría hacer dudar de si el cauce instrumental de un Decreto-ley es un cauce adecuado para articular, a través de

él, medidas en las cuales se alteren tipos, bases o elementos constitutivos de la relación jurídico-tributaria. Pues bien, mi Grupo Parlamentario y el Gobierno entienden que el cauce está perfectamente autorizado por la Constitución y que la restricción que establece ésta respecto a que, a través del instrumento del Decreto-ley, no pueda ser utilizado el citado instrumento para alterar el régimen general electoral o las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos a que hace referencia el título I, ni el Régimen General de las Comunidades Autónomas, queda en absoluto afectado por la presente norma. Que la Constitución, cuando establece la citada limitación, en ningún caso debe entenderse referida al sistema de la tributación, al principio concreto que establece el artículo 31 de que sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Porque el término «ley» es empleado en un sentido amplio, dentro del cual debe entenderse comprendido el Decreto-ley como operación de anticipación de voluntad por parte del Gobierno, por razones de urgencia.

No hay inconstitucionalidad en ello, y entendemos que queda expresamente justificado no sólo por los argumentos que he citado, sino que la propia voluntad de esta Cámara ya se ha pronunciado en ese sentido, y cabe traer a la memoria de los señores Diputados que interpretaciones parecidas a las que en este momento estoy efectuando, de la constitucionalidad del empleo del Decreto-ley para modificar normas de carácter fiscal en cuanto a alteración de elementos de la relación jurídico-tributaria, han sido ya efectuadas y votadas de conformidad por todos los Grupos Parlamentarios en esta Cámara. Traigo a la memoria de los señores Diputados básicamente el Real Decreto-ley 11/1979, de 20 de julio, sobre Financiación de las Corporaciones Locales; el Real Decreto-ley 2/1980, de 11 de enero, de Ordenación económica sobre medidas económicas y fiscales complementarias a la elevación del precio de productos petrolíferos; y, en cierto sentido también, el Real Decreto-ley 5/1980, de 19 de mayo, sobre Bonificación de las cuotas de rendimientos de determinados empréstitos y préstamos a sa-

tisfacer por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

He dicho estas palabras por si acaso pudiera haberse suscitado la duda de la constitucionalidad del instrumento empleado por el Gobierno, del instrumento del Decreto-ley. Los restantes requisitos, a los cuales aparece vinculada en el artículo 86 de la Constitución la utilización de dicho instrumento, entiendo que aparecen cumplidos, y en la primera parte de mi intervención he pretendido justificar lo que era necesidad de urgencia, como vehículo fundamental a través del cual el Gobierno expresa una voluntad, una preocupación de adecuación de un proceso legislativo y que, por razón de temporalidad, debe anticipar mediante la utilización del Decreto-ley, preferentemente al proyecto de ley, porque, en cualquier caso, se encontraría fuera de plazo la utilización del normal proyecto de Decreto-ley.

El propio proyecto de Decreto-ley alude a algunas de las argumentaciones. Es preciso que este Decreto-ley esté en vigor antes que rija la Ley de Presupuestos, pero hay unas razones más superiores. La alteración que se efectúa en el sistema de tributación del bingo obliga a un nuevo sistema de corrección de los cartones tradicionales del bingo, y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con posterioridad a su aprobación por esta Cámara, requiere un plazo prolongado para poder colocar en mercado lo que son instrumentos necesarios para su utilización.

Las razones de urgencia, las razones de necesidad, señores Diputados, entiendo que son evidentes y suponen el más importante razonamiento de forma que tiene el Gobierno en cuanto a la utilización de este instrumento. En lo que se refiere al fondo, creo que he aludido suficientemente a lo que es voluntad política del proyecto: incremento de la fiscalidad de los Ayuntamientos, de la fiscalidad propia, incremento de la participación de los Ayuntamientos en la fiscalidad del Estado, en la cifra en que aparecen incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, hasta un tope que será innecesario o insuficiente en este momento, pero que, en todo caso, demuestra una clara voluntad política de apoyo, tope que llega al 10 por ciento en la

imposición indirecta y al 1 por ciento, por primera vez, en la imposición directa.

Por las razones expuestas, el Grupo Parlamentario Centrista solicita de los demás Grupos Parlamentarios de esta Cámara el voto favorable al Real Decreto-ley 9/1980, sometido a la consideración de la misma, por entender que su necesidad y su justificación es evidente por el uso de un buen Gobierno, y en este sentido apela al sentido de responsabilidad de la Cámara y solicita de los demás Grupos Parlamentarios el voto favorable al mismo.

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Ilorente): Para fijar su posición sobre este debate, en nombre del Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, tiene la palabra el señor Lluch.

El señor LLUCH MARTIN: Señor Presidente, señores Diputados, voy a fijar nuestra posición de una manera muy breve, puesto que los argumentos de fondo son simples y los voy a intentar explicar.

En primer lugar, decir que hay un aumento de la imposición indirecta, pero que este aumento —que hay que reconocerlo, no hay otro sistema, porque siete es mayor que seis—, creemos que es claramente insuficiente.

En segundo lugar, la participación en el Impuesto sobre la Renta aparece por primera vez, y esto es positivo, pero también hay que decir que un 1 por ciento es una cifra muy reducida, muy baja.

La tercera característica fundamental es con respecto al juego. No voy a entrar en la discusión sobre la moralidad que aquí se ha iniciado, porque uno es jansenista y está al margen de estas cuestiones; simplemente quiero decir que no parece un criterio normal —utilizo las palabras del Decreto-ley— decir que si el incremento recaudatorio es menor del 25 por 100, sí que participan los ayuntamientos, y si es mayor del 25 por ciento, va al Estado. Y no es adecuado, en principio, porque la palabra normal es una palabra difícil de utilizar y no parece conveniente en un Estado muy centralizado —desde el punto de vista financiero— el hecho de que cuando una figura impositiva tie-

ne un poder recaudatorio muy rápido y creciente, y este poder recaudatorio beneficiaba a los ayuntamientos, pero también a otras afectaciones, como subnormales, educaciones especiales, etc., porque es un impuesto muy elástico, se sustraiga de la Administración Local y se vuelva a pasar a la Administración Central. Esto pensamos que en una evaluación global hay que contemplarlo como un hecho negativo.

Por otro lado, la otra razón que se da es la de que este incremento extra o no normal irá a parar a inversión real por mano del Estado. Esto nos parece inadecuado, entre otras razones, porque la reciente experiencia nos enseña que los ayuntamientos son más aptos para aumentar la inversión real que el Estado, y en las estadísticas de los dos últimos años se ve muy claramente cómo el comportamiento inversor de las Corporaciones Locales ha sido mucho más satisfactorio que el del Estado.

Por tanto, yo creo que hubiese sido mejor enunciar que es conveniente que las Corporaciones Locales destinen estas cantidades suplementarias a inversiones reales por su mayor capacidad; en cambio, ahora se hace a través de la vía estatal, que creemos que hasta el momento se ha demostrado menos eficaz.

Si hay un problema de transferencias —que lo hay— y de no funcionamiento de la Comisión de Transferencias en un área suficiente —que lo hay—, lo que trata es de hacer transferencias y no este tipo de soluciones. Por tanto, nos parece que estamos dando un paso hacia la centralización, negativo, y lo estamos dando porque los ayuntamientos, en su estado actual, tienen mayor capacidad de expansión de la inversión que el propio Estado.

El segundo aspecto que quiero tratar sobre el juego se refiere a las Comunidades Autónomas. En el Decreto-ley hay unas palabras que dicen que es compatible este Decreto-ley con la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas. Yo creo que hay que reconocer que compatible durante unos cuantos meses no lo es. Es decir, al menos para el próximo año no lo es, puesto que si queda afectado por el Estado quiere decir que no quedará afectado por la Comunidad Autó-

noma y, por consiguiente, que este impuesto, que es un impuesto cedido según la Ley Orgánica, no se va a ceder durante el año 1981.

En este sentido, creemos que cuando votamos sí a la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas dijimos que esto era una pierna, que hacía falta la otra pierna para andar, que era la aplicación, y en este sentido hay que decir claramente que votar sí a este Decreto-ley es votar a favor de una medida que al menos mantienen la misma situación centralista durante los próximos doce meses. Por tanto, el espíritu del debate que hubo en este Congreso el 8 de mayo de este año, en el cual se trataba de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña, cuando paralelamente había una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Comunista y otra proposición no de ley del Grupo Parlamentario Minoría Catalana, el espíritu, digo, era traspasarlo durante el próximo año, y yo creo que tal espíritu es incompatible con este Decreto-ley.

Por tanto, pensamos que votar a favor de este Decreto-ley es votar en contra de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, al menos por un año, lo que es negativo, lo que indica que se establecen unas leyes, pero que no se cumplen después y, además, romper el acuerdo unánime que hubo aquí el 8 de mayo, en el sentido de que el impuesto de juego cedible a todas las Comunidades Autónomas también era cedible para Cataluña.

Resumiendo: con respecto a la imposición indirecta, hay un avance que nos parece insuficiente; la introducción de participación del impuesto sobre la renta es meramente simbólica, puesto que el 1 por ciento está muy por debajo de lo que se ha solicitado, y, con respecto al juego, he señalado ya que, a nuestro entender, será negativo para el aumento de la inversión real en su conjunto, vía estatal o vía Corporaciones Locales, es negativo.

En cuanto a la aplicación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en cuanto a la visión de cómo la financiación de las Comunidades Autónomas en la construcción del Estado de las autonomías vaya dando pasos concretos y claros, pensa-

mos que ese Decreto-ley también es negativo y, por tanto, vamos a votar desfavorablemente.

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Llorente): El señor Ministro de Hacienda tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (García Añoveros): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, sólo me voy a referir a un punto muy concreto de la intervención del señor Lluch. Su sugerencia, que yo me permito calificarla de pecaminosa, de que, aprobado este Decreto-ley, no se puede hacer la ley de transferencias a Cataluña de acuerdo con lo previsto en la LOFCA, no es correcta, sin duda, por un error de interpretación. Es tanto como decir que como hemos mandado el presupuesto del año 1981 a esta Cámara, diciendo que el Impuesto de Transmisiones se integra en el sistema del Estado, porque esa es la situación legal ahora, no se puede transferir el Impuesto de Transmisiones para el año 1981 a Cataluña. Eso no es así; podemos transferir a Cataluña para el año 1981 todos los impuestos previstos en la LOFCA, incluida la tasa de juego. Lo que quiere decir es que lo que aquí es para el Estado será para la Generalidad. Nada más; al contrario, si reservamos algo no afectado para el Estado en esta tasa, al transferirlo a Cataluña será para la Generalidad, se le transferirá sin afectación concreta en el exceso. Por tanto, muy al contrario de lo que ha indicado el señor Lluch, es posible, y además más beneficioso para la Generalidad en cuanto que podrá recibir la parte correspondiente de la transferencia desafectada y, por tanto, para las atenciones generales que le incumban. Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Llorente): Para fijar su posición en este debate, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, tiene la palabra el señor Fajardo.

El señor FAJARDO SPINOLA: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, consciente de la hora en la que se produce este debate, voy de verdad a ser breve, y no ocu-

po esta tribuna en este tema si no fuera porque realmente considero que existen, digamos, argumentos y razones poderosas que aún no se han esgrimido desde aquí para oponerse a la tramitación de este Decreto-ley que va a ser precisamente la posición que adopte el Grupo Parlamentario que yo represento en cuanto a la forma del Decreto-ley y también en cuanto al fondo.

Resulta para nosotros inaceptable, intolerable, la utilización excesiva de esta técnica de acudir a los Decretos-leyes que realmente —en esta sesión lo estamos viendo— va constituyendo ya un uso relativamente abusivo de la técnica legislativa.

Pero para nosotros resulta mucho más intolerable e inaceptable en este caso el que sobre un tema como éste, el tema de los Ayuntamientos, se hayan tendido diversas cortinas de humo que realmente impiden ver lo que está pasando con este Decreto-ley.

Pienso que una cortina de humo que tal vez involuntariamente se ha tenido sobre este Decreto-ley en este debate ha sido la de caer excesivamente en la valoración, moralizante o no, del tema del juego. Pienso que realmente aquí hay que hablar de la financiación de los Ayuntamientos.

Pero una segunda cortina de humo sobre el tema podría constituir aquella que consiste en utilizar el tema de la financiación de los Ayuntamientos para justificar un Decreto-ley que no sería necesario.

Aquí se ha hablado por el señor Rodríguez-Miranda de la necesidad de utilizar esta técnica legislativa de urgencia, este procedimiento urgente, porque si no, en aplicación del artículo 134, 7, de la Constitución, no podrían consignarse en el Presupuesto determinados aumentos tributarios.

Pero es que lo que se señala en este Decreto-ley no son aumentos tributarios, son participaciones o modificación de las participaciones de los Ayuntamientos en ingresos del Estado.

En consecuencia, se trata de una función distributiva de ingresos locales entre los distintos agentes públicos, y eso es precisamente lo que verifica un Presupuesto, ésa es la naturaleza normal del Presupuesto, el hacer esa asignación a este o al otro ente público.

Por tanto, no era necesario para aquello que

se refiere a la financiación de los Ayuntamientos el Decreto-ley. El Decreto-ley era necesario para justificar una modificación de tipos y de cuotas, y ahí está el quid de la cuestión. Y precisamente nos colocan al lado del tema del aumento de los tipos y cuotas del juego el tema de los Ayuntamientos, bien sea para que nosotros, pendientes de aumentar los recursos, preocupados por aumentar los recursos y la participación en los del Estado por parte de los Ayuntamientos, aceptáramos este Decreto-ley. Pensamos que resulta intolerable esta técnica. Por la vía del presupuesto se puede conseguir el efecto que se establece en el artículo 2.º del Decreto-ley. En cambio, no lo que se establece en los artículos 1.º y 4.º

Vuelvo a repetir entonces que para la financiación de los Ayuntamientos, para la modificación de la participación que en el artículo 2.º se establece, no resultaba necesario, a nuestro humilde entender, una ley previa que, por la urgencia, tendría que adoptar la forma, como se pretende, de Decreto-ley. Sí, en cambio, para esos aumentos que no van precisamente dirigidos a los Ayuntamientos.

Por esa razón, y digo que voy a ser muy breve, no voy a entrar en el fondo. Nosotros, en cuanto al fondo, podríamos pronunciarnos acerca de esta participación en el 1 por ciento de la renta, pues también estamos a favor del 5 por ciento. Tendríamos que decir respecto del 10 por ciento en los indirectos que se ha englobado dentro la gasolina, cuando, a nuestro entender, debería sacarse de ese 10 por ciento con la finalidad precisamente de financiar al transporte. Pero, en fin, ocasión tendremos no solamente de tratar estos temas a lo largo del debate de los presupuestos, sino también de sacar cifras, que hechas están, que demuestran que la actitud del Gobierno respecto de los Ayuntamientos no puede calificarse precisamente, como se ha hecho aquí hace un momento, de generosa. Porque incluso el propio calificativo de generosa ya está indicando cierta actitud patrimonialista del Gobierno respecto del presupuesto. Parece que el presupuesto del Estado es del Gobierno, y se ceden, de alguna manera, se regalan o se entregan, unas migajas a los Ayuntamientos.

Una concepción, en cambio, diferente, entendería que tenemos que crecer a un ritmo determinado si queremos poner en nuestra boca las palabras «autonomía municipal», si queremos llegar reamente a esa cota de Europa de una participación de un 25 por ciento.

Pero, como digo, no voy a entrar en el tema, voy a decir que éste ha sido un Decreto-ley que ha sorprendido al movimiento municipalista, que ha estado en relación con el Gobierno en una serie de reuniones. Precisamente el Presidente del Gobierno prometió un programa a medio plazo que debería precisar esta senda de aumento de la participación de los Ayuntamientos y ese programa no existe. Aquí aparece una pieza más del mismo sin que realmente se haya negociado ese conjunto, se haya hablado de ese conjunto.

Yo quiero volver, sin embargo, a mi argumento fundamental de rechazo del Decreto-ley. Ese argumento es: no es necesario el Decreto-ley para autorizar participaciones, porque las participaciones las puede operar el propio Presupuesto del Estado, puesto que no hay mayor gravamen al ciudadano, no hay aumento al ciudadano; hay una redistribución que se opera entre los agentes públicas y ésa es la financiación del presupuesto. Si era necesario, en cambio, para ese aumento de cuotas y de tipos tributarios que se establecen en otros artículos de este Decreto-ley y que no están establecidos precisamente en función o beneficios de los Ayuntamientos, sino por un loable deseo, tal vez del Gobierno y de su política, de arbitrar nuevos ingresos de cara al gasto previsible en los Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Gómez Llorente): Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.

El señor MINISTRO DE HACIENDA (García Añoveros): Señor Presidente, señoras y señores Diputados, muy brevemente también, pues comprendo el cansancio de los pocos Diputados que tienen la paciencia de aguantar en el hemiciclo.

En primer lugar, quiero decir que ha habi-

do negociaciones con lo que aquí se ha llamado «movimiento municipalista» y que el «movimiento municipalista», así llamado, tenía motivos para conocer en materia referente a los Ayuntamientos el contenido del Decreto-ley, y estaban de acuerdo. (El señor FAJARDO SPINOLA: No estaban de acuerdo.)

En segundo lugar, yo creo que el tema del juego es cierto que tiene muchas connotaciones que aquí no se han planteado. Es cierto, como decía mi antecesor en la cátedra de Sevilla cuando explicaba los Presupuestos del Estado hace muchos años, que el Ministro de Hacienda era el primer tahur de España, y eso es cierto, porque tiene la lotería, y ahora, además de la lotería, las quinielas, el bingo, la Fábrica de Moneda y Timbre, etc. Esto es muy antiguo, viene de Carlos III; por tanto, será difícil de cambiar. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) En cualquier caso, si hay juego, parece razonable gravar el juego, lo que producirá dos efectos: que no haya que gravar otras cosas por imposición indirecta o directa y, además, siempre un gravamen adicional será un elemento disuasorio del juego, nunca un elemento que incida como incentivo para jugar. Si, como consecuencia, por ejemplo, del aumento de la tasa del bingo el porcentaje que se lleva al jugador que gana es menor, será un elemento disuasorio, pero nunca un elemento que favorezca el juego en sí.

Quiero indicar también que no entiendo cómo se puede llamar simbólica a una participación del 1 por ciento en el Impuesto sobre la Renta, porque 7.100 millones de pesetas no es una cantidad simbólica, es una cantidad apreciable; puede ser pequeña en relación con 35.000 millones, pero, desde luego, no es una cantidad simbólica.

Por último, quiero indicar que el Decreto-ley, como tal Decreto-ley, era necesario por tres razones: en primer lugar, porque no puede estar en vigor el 1 de enero la tasa de juego si no está el Decreto-ley aprobado antes, ya que los medios cobratorios requieren tres meses por lo menos para realizarse y, por tanto, si no está una norma aprobada no se puede poner en funcionamiento el mecanismo cobratorio. En segundo lugar, por lo que establece el artículo 4.º del Decreto-ley, que es muy importante para que en la Ley de

Presupuestos se puedan modificar tarifas de licencias fiscales, se puedan actualizar las bases de la Contribución Urbana y se puedan actualizar tipos fiscales y tasas de tributos parafiscales y los tipos tributarios, en su caso, de la tasa del juego; por último, para poder consignar en Presupuestos, de acuerdo con una técnica adecuada, las cantidades correctas para los municipios. Es decir, la cantidad correcta que se gasta en los municipios, que se atribuye a los municipios, debe estar de acuerdo con una normativa sustantiva que, puesto que no existía, había que hacer mediante este Decreto-ley, porque, si no se podían consignar en los Presupuestos correctamente porcentajes adicionales de participación en los impuestos directos o indirectos.

Esta es la posición correcta, y aunque en alguna otra ocasión se hizo de otro modo, no es lo correcto. Nosotros estimamos que para mantener la Ley de Presupuestos, en lo posible, alejada de lo que debe ser normas sustantivas, era necesario el Decreto-ley para consignar incrementos para los Ayuntamientos en la cuantía indicada en el año 1981. Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.

El señor FAJARDO SPINOLA: Señor Presidente, solicitaría medio minuto para rectificar muy brevemente.

El señor PRESIDENTE: No ha lugar. Sabe que este debate lo cierra el Gobierno, como los de las mociones lo cierra el proponente, y esto viene siendo sostenido por la Presidencia en todos los debates.

El señor FAJARDO SPINOLA: Es que tal vez no se me han entendido debidamente los argumentos que he expuesto anteriormente en la tribuna y quería precisarlos brevemente.

El señor PRESIDENTE: No es posible. Vamos a pasar a la votación. Se somete a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/1980, de 26 de septiembre, so-

bre financiación de los Ayuntamientos y tasa del juego.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 168; en contra, 123.

El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el Real Decreto-ley 9/1980, de 26 de septiembre, sobre financiación de los Ayuntamientos y tasa del juego.

¿Algún Grupo Parlamentario solicita que se someta a decisión del Pleno la tramitación de este Real Decreto-ley como proyecto de ley? (Asentimiento.)

Habiéndose producido la petición de varios Grupos Parlamentarios, sometemos a la Cámara la decisión de si este Real Decreto-ley,

ya convalidado, se tramita o no como proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 285; en contra, cuatro; nulos, uno.

El señor PRESIDENTE: El Real Decreto-ley 9/1980, de 26 de septiembre, sobre financiación de los Ayuntamientos y tasa del juego será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, conforme al artículo 86 de la Constitución.

El Pleno se reanudará mañana a las cuatro y media de la tarde. Se levanta la sesión.

Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

RECTIFICACION

A petición del Diputado don Tomás García García (Grupo Parlamentario Comunista), se procede a rectificar a continuación un error que se ha deslizado en la transcripción taquigráfica de un pasaje de su discurso sobre el proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos:

En el "Diario de Sesiones" número 113, correspondiente a la sesión celebrada por el Pleno el miércoles 24 de septiembre de 1980, en su página 7298 y en el segundo párrafo de la segunda columna, se dice:

"... cuando Cruz Gallastegui, en el año 1932, se llevó el primer premio por maíz híbrido en el Congreso de Praga..."

Y debe decir:

"... cuando Cruz Gallastegui, en el año 1932, se llevó el primer premio por maíz híbrido en el Congreso de Prades..."

<p>Precio del ejemplar 50 ptas. Venta de ejemplares: SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A. Cuesta de San Vicente, 36 Teléfono 247-23-00. Madrid (8) Depósito legal: M. 12.590 - 1981 Imprime: RIVADENEYRA, S. A.-MADRID</p>